



# LEGALIDAD

## DERECHO Y SOCIEDAD

EDICIÓN ESPECIAL

XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales  
Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad

2016



# **XIII** Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016

Primer Evento  
**Legalidad Derecho y Sociedad**

## **CONVOCATORIA**

23 al 25 de marzo de 2016  
Palacio de Convenciones de La Habana



# LEGALIDAD DERECHO Y SOCIEDAD

No. 3  
Edición  
Especial  
2016

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

## **DIRECTOR EJECUTIVO**

Msc. Marlén Fernández Machado

## **CONSEJO DE REDACCIÓN**

Msc. Yamila Peña Ojeda  
Lic. Dixán Fuentes Guzmán  
Msc. Fernando Rodríguez Infante  
Msc. Osmín Álvarez Bencomo  
Msc. Caridad Sabó Herrera  
Lic. Miguel Ángel García Alzugaray

## **EDICIÓN Y CORRECCIÓN**

Msc. Addis L. Ávila Sterling  
Lic. Yanisel Bernal Almira  
Lic. Jessica Rivero Rodríguez

## **DISEÑO GRÁFICO**

D.I. Daniela Laura Rodríguez Bello

## **IMPRESIÓN**

Agencia de comunicación Publicitur

## **REDACCIÓN**

Ave 1ra #1801 e/ 18 y 20. Rpto. Miramar, Municipio  
Playa, La Habana. CP 11300

**TELÉFONO:** (537) 206 1037

**E-Mail:** caridadsabo@fgr.cu,  
dcinstitucional@fgr.cu

**RNPS:** 2413  
**ISSN:** 2414-8431

La Revista Legalidad, Derecho y Sociedad constituye la publicación oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba, emitida con una frecuencia cuatrimestral, como continuidad de la Revista Legalidad Socialista. Es un espacio donde se presentan artículos y ponencias, cuyos autores están fundamentalmente vinculados al sector jurídico, así como noticias y secciones con informaciones actualizadas de interés social.

El Consejo de Redacción posee la potestad para realizar cambios relacionados con la estructura, extensión, redacción y estilo de los trabajos, en función de elevar la calidad de los contenidos a publicar.

Los interesados pueden enviar sus trabajos, opiniones y sugerencias a la Redacción de la revista.

# SUMARIO

## **NOTA AL LECTOR**

Pág. 3

## **NOTICIAS**

Pág. 4

Convocatoria - XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad

Pág. 4

Fortaleciendo las Relaciones Internacionales

Pág. 9

Sesiona congreso sobre Criminalidad y Justicia Penal

Pág. 10

Espacio para el debate entre fiscales iberoamericanos

Pág. 10

Seminario entre fiscales de Cuba y Vietnam

Pág. 12

Sesiona Segundo Evento Científico Nacional de la Fiscalía General

Pág. 14

## **PONENCIAS**

Pág. 16

## **SABÍAS QUE?**

Pág. 46

Un acercamiento a la cultura tributaria en Cuba

Pág. 47

## **GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS**

Pág. 52



### NOTA AL LECTOR

El presente número de la Revista “Legalidad, Derecho y Sociedad”, órgano oficial de prensa de la Fiscalía General de la República de Cuba, dedicará sus páginas al XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y al primer evento Legalidad, Derecho y Sociedad, a celebrarse del 23 al 25 de marzo de 2016, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Este evento, devenido en uno de los más prestigiosos foros científicos internacionales del Derecho en Iberoamérica, contará con la presencia de reconocidos profesionales del Derecho y de otras especialidades de diversas latitudes, que intercambiarán experiencias y conocimientos relacionados con el Derecho Penal y su vinculación con la Protección Jurídica de los ciudadanos, especialmente de los menores de edad, las mujeres y la familia.

Esta edición especial invita a la integración internacional para ofrecer respuestas más justas a las demandas de los pueblos desde nuestro quehacer jurídico, y a los retos aún por enfrentar.

Ofrecemos, desde este espacio, a todos los participantes un cordial saludo y los invitamos a compartir las sesiones de trabajo de este importante encuentro, a disfrutar de la hospitalidad del pueblo cubano y aunar esfuerzos para garantizar cada día, un sistema de justicia penal con un mayor contenido ético, que coloque en el centro de su actividad la defensa de la sociedad, sin detrimento de las garantías y derechos individuales de los ciudadanos.

Darío Delgado Cura  
Fiscal General de la República





# CONVOCATORIA

## XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2016 Y PRIMER EVENTO LEGALIDAD DERECHO Y SOCIEDAD

XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad

La Fiscalía General de la República de Cuba convoca al XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y al Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 23 al 25 de marzo de 2016.

El encuentro se realizará con el auspicio del Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de Justicia, la Unión Nacional de Bufetes Colectivos y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

El objetivo principal es intercambiar sobre variadas materias entre colegas de diferentes países, para compartir experiencias y conocimientos que tienen expresión en la vida cotidiana, relacionados con el Derecho Penal y su vinculación con la Protección Jurídica de todos los ciudadanos, especialmente de las mujeres, menores de edad y otros que lo necesiten.

El evento va dirigido fundamentalmente a fiscales, procuradores, abogados, jueces, policías, penitenciarios, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legales, psiquiatras forenses, funcionarios que atienden menores víctimas y con trastornos de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores jurídicos, profesores y estudiantes universitarios, entre otros especialistas interesados en la materia.

Los delitos económicos y las conductas asociadas a la corrupción constituyen una preocupación de estudiosos y operadores del Derecho y de la Economía, así como de directivos, funcionarios y especialistas del sector empresarial, que tienen la responsabilidad de cumplir las leyes y proteger los bienes del Estado cubano, por lo que, como parte del Evento Ciencias Penales, se realizará el Taller Pre-Evento "Economía cubana actual y delitos económicos", el 22 de marzo de 2016, en el Palacio de Convenciones de La Habana.



# Temas del evento

## TEMAS PENALES

- La prevención y enfrentamiento al tráfico ilegal de drogas y de migrantes. La trata de personas.
- Delitos económicos y funcionariales.
- Delicuencia transnacional y el ciberdelito.
- Terrorismo.
- Lavado de activos.
- Delito ambiental.
- Tráfico ilegal de menores.
- Tráfico de órganos de menores.
- Explotación sexual de menores.
- La ejecución de la pena en las personas privadas de libertad.
- La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal.
- Retos actuales y futuros.
- El papel del Fiscal en la legitimación de la detención.
- la fase preparatoria en el proceso penal. Prueba y nuevas tecnologías.
- Efectividad y profesionalidad del Fiscal en el acto del juicio oral.

## RETOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

- El Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la Corrupción.
- Política económica y desarrollo institucional como elementos esenciales para enfrentar la Corrupción.
- El fortalecimiento del papel de control del Estado como garantía para mejorar la gestión pública, prevenir y aminorar las manifestaciones de Corrupción.

- Tratamiento legislativo de la lucha contra la Corrupción.
- El Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la Corrupción.
- Los organismos internacionales y las relaciones intergubernamentales en la lucha contra la Corrupción.

## TEMAS DE FAMILIA, MENORES Y OTRAS TEMÁTICAS

- Protección y atención a la violencia en el seno de la familia.
- Delitos relacionados con los niños y las niñas.
- Necesidad de protección integral de los menores de edad.
- Papel de la Fiscalía en la protección de los derechos del menor.
- Aseguramiento procesal de los derechos del menor.
- Explotación laboral del menor.
- Violencia intrafamiliar y de género.
- Relaciones paternas filiales y función tutelar del Estado.
- Tutela penológica de niños y niñas.
- Protección al menor con trastornos de la conducta.
- Leyes migratorias y minoridad.
- El control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía.
- El derecho de quejas y peticiones.



# ANNOUNCEMENT

## 13TH INTERNATIONAL MEETING ON CRIMINAL SCIENCES 2016 AND 1ST MEETING ON LEGALITY, LAW AND SOCIETY

The Attorney General's Office of the Republic of Cuba is pleased to announce the 13th International Meeting on Criminal Sciences-2016 and the 1st Meeting on Legality, Law and Society, which will be held from March 23rd to 25th, 2016, at the Havana International Conference Center, Cuba.

Such meeting will be made under the auspices of the People's Supreme Court of Justice, Ministry of Justice, National Union of Cuban Jurists, National Organization of Collectives Lawyer's Offices, as well as the School of Law of the University of Havana.

It is aimed at exchanging experiences among colleagues from different countries so as to search and provide a solution for

the dissimilar current problems, which are related to Criminal Law and its links with the Legal Protection for citizens, mainly for women, minors and others.

This event is mainly addressed to district attorneys, prosecutors, lawyers, judges, police staff, forensic pathologists, examining lawyers, penitentiary authorities, criminologists, criminal lawyers, forensic doctors, forensic psychiatrists, victimologists, judge advocates, auditors, economists, legal advisors, sociologists, psychologists, university professors and students, and any other specialists interested in its topics.





# Topics of the event

## CRIMINAL ISSUES

- Prevention and fight against illegal drug and emigrant trade. The people trade
- Economic and bureaucratic crimes
- Transnational criminality and cybercrime
- Terrorism
- Capital laundering
- Environmental crime
- Trafficking of children
- Child organ trafficking
- Child sexual exploitation
- The execution of sentence for persons deprived of freedom
- Legal entity as Criminal Law subject. Current and future challenges
- The role of the district attorney for the arrest legitimization
- The preparatory stage for criminal process. Test and new technologies.
- District Attorney's professionalism and effectiveness during the oral proceeding act.

## CHALLENGES FACING CORRUPTION

- The State, Society and Law in the struggle against Corruption.
- Economic policy and institutional development as essential elements to face Corruption.
- The strengthening of the State control role as a guarantee to enhance the governance, as well as prevent and reduce the signs of Corruption.
- Legislative treatment for the struggle against Corruption.
- Contemporary development of Law facing Corruption.
- The Public Ministry and Judicial System facing Corruption.
- The international bodies and intergovernmental relations in the struggle against Corruption.

## ISSUES ON FAMILY, MINOR AND OTHER TOPICS

- Protection and attention to violence in the bosom of the family.
- Children-related crimes. Need of comprehensive protection for minor.
- The role of the Attorney's Office in the protection of minor's right.
- Procedural securing for minor's right.
- Labor exploitation to minor.
- Gender and domestic violence.
- Paternal-filial relations and the tutional State function.
- Penological guardianship for children.
- Protection to minor suffering from behavior disorder.
- Immigration Laws and Minority.
- Legality control as a guarantee of the legal safety for citizens.
- The right of complaints and requests.





# REPRESENTACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL SECTOR JURÍDICO



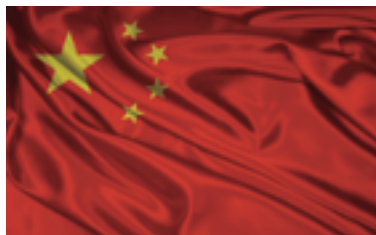
# FORTALECIENDO LAS RELACIONES INTERNACIONALES

**L**a Fiscalía General de la República ha establecido relaciones con 11 países de América Latina, Europa, África y Asia, con el objetivo de fomentar la cooperación internacional en el marco legal.

Actualmente, tiene firmado memorándums de entendimiento con Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y China, los que establecen las bases sobre las cuales se desarrollan las relaciones interinstitucionales entre estas Fiscalías.

Además, ha rubricado programas de cooperación con: Vietnam, Angola, Mozambique, Belarús, Rusia y Brasil, los cuales conciben acciones concretas que permiten el intercambio en múltiples áreas del trabajo fiscal y no fiscal.

En el 2015, como resultado de la colaboración con países de todo el orbe, especialistas de la Fiscalía General asistieron a seminarios, cursos y talleres, sobre temáticas relacionadas con la trata de personas, el cibercrimen, la capacitación, la protección a la niñez, el enfrentamiento a la corrupción y los delitos transnacionales.





## Congreso sobre Criminalidad y Justicia Penal

Entre el 5 y el 7 de octubre de 2015 tuvo lugar en San José, Costa Rica, el Congreso Iberoamericano sobre Criminalidad y Sistemas de Justicia Penal en América Latina y el Caribe, en el cual participaron Marlén Fernández Machado, Vicefiscal General de la República y Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular.

En este encuentro se le rindió homenaje a Jorge Arturo Montero Castro, fundador y primer director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en ocasión de celebrar este año el 40 aniversario de su creación.

Los participantes trataron temas relacionados con la justicia penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la situación de la criminalidad en diferentes regiones del mundo; el Género, criminalidad, victimización y justicia penal; y los sistemas penitenciarios.

Además, abordó algunos relacionados específicamente con América Latina y el Caribe, entre ellos, los aciertos y desafíos de las reformas procesales en la región, los códigos penales de los países que forman parte de ella, los retos del Ministerio Público, y la situación de la droga y el narcotráfico.

Participaron representantes de varias naciones de todo el orbe, entre ellas: Argentina, Suecia, Japón, México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Panamá, Brasil, Chile y Portugal.

## Espacio para el debate entre fiscales iberoamericanos

**JESSICA RIVERO RODRÍGUEZ**

*Periodista*

*Fiscalía General de la República*

La XXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), sesionó los días 28 y 29 de octubre en la ciudad Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Además, el día 30 se efectuó el Seminario Internacional denominado “Modelos de Gestión del Ministerio Público en Iberoamérica”.

Al encuentro asistió una representación de la Fiscalía General de Cuba, encabezada por Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República de Cuba, integrada por: Marcos Antonio Caraballo de la Rosa, Fiscal Jefe de la Secretaría, Patricia Rizo Cabrera, Fiscal Jefa de la



Dirección de Cooperación Jurídica y Relaciones Internacionales y Alexis Ramos Nodarse, Fiscal de la Dirección de Información y Análisis, además, participaron fiscales de las 21 naciones miembros de la Asociación, entre ellas Argentina, México, España, Paraguay, Ecuador, Portugal.

En la clausura, el Fiscal General de Cuba fue elegido como Vicepresidente para América del Norte, de la AIAMP. Además, se seleccionó como Presidente de la Asociación al Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro Guerrero Peñaranda. Lo acompañan en la directiva el Fiscal General de Costa Rica, Jorge Alberto Chavarría Guzmán, designado Secretario General Permanente; la Procuradora General de Portugal, Joana Marques Vidal, como Vicepresidenta Ibérica; y la Procuradora General de México, Arely Gómez González, Directora del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos.

Esta Asamblea marcó importantes hitos en la construcción de directrices comunes para combatir el delito en la región iberoamericana, cuyos alcances no reconocen fronteras, ni nacionalidades.

El ciberdelito fue el tema central de la reunión, aunque los juristas iberoamericanos también debatieron acerca de la trata y tráfico de personas, y el narco-tráfico, a partir de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

En la cita se presentaron los informes de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IbeRed), el Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica (Gafilat), el Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), todos socios estratégicos de la AIAMP. En este espacio se aprobó la reforma del estatuto de la organización.

Esta fue una oportunidad para seguir fortaleciendo las relaciones de amistad existentes entre la fiscalía de Cuba y de otras naciones presentes. En la clausura de este evento, el recién elegido presidente de la AIAMP, manifestó que: “Vamos a aplicar una política de puertas abiertas, de interacción. De enfocarnos en la sociedad (...). Estos dos días han sido muy productivos y positivos en términos de fortalecer nuestra institución”.



Ramiro Guerrero también expresó que en su gestión se realizará un trabajo horizontal, con la participación de todos los países miembros de la Asociación.

Son miembros de esta asociación fiscalías y ministerios públicos de 22 países iberoamericanos.

La Fiscalía General de la República de Cuba es parte de la AIAMP desde su fundación en 1954, en Brasil, y su segundo

congreso fue realizado precisamente en esta nación, en 1957.

La misma, celebra anualmente su asamblea, con la finalidad de hacer el seguimiento a los compromisos asumidos en encuentros anteriores, así como la aprobación de actuales iniciativas en beneficio a la marcha de programas, proyectos y canales tecnológicos.

## SEMINARIO ENTRE LAS FISCALÍAS DE CUBA Y VIETNAM

Entre el 9 y 11 de noviembre de 2015, la Fiscalía General de la República de Cuba y la Fiscalía Popular Suprema de la República Socialista de Vietnam realizaron un seminario con el propósito de brindar experiencias sobre temas relacionados con la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

Al respecto, los participantes intercambiaron sobre el papel que desempeñan cada una de estas fiscalías en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como la actividad que realizan en aras de garantizar la legalidad en la ejecución de las sanciones penales.

Este seminario forma parte del



Programa de Colaboración para el período 2015 - 2016, firmado entre ambos Órganos en noviembre de 2014, durante el XII Encuentro Internacional Ciencias Penales. Este acuerdo tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional en el marco legal y desarrollar actividades conjuntas para el intercambio de experiencias en diversos campos.

El programa del seminario incluyó la visita a varios sitios de interés, entre ellos: un centro de protección a niños, niñas y adolescentes de La Habana -perteneciente a la Dirección de Menores del Ministerio de Interior-, al establecimiento penitenciario La Lima, al Casco Histórico de La Habana y a la Casa de Asia, además colocaron una ofrenda floral en el parque Ho Chi Min en la capital, dedicado a esta importante personalidad de la nación asiática.

En representación de la fiscalía vietnamita asistió Tran Cong Phan, Vicefiscal General, el director de Cuadro y Personal de esta institución, el fiscal jefe de la Fiscalía Popular de la provincia Quang Ninh, los fiscales generales de las ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh, así como la subdirectora de la Dirección de Colaboración Internacional y Asistencia Jurídica en Materia Penal.

Mientras, la delegación cubana estuvo integrada por los fiscales jefes de las direcciones de Protección de los Derechos Ciudadanos, Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios, Cuadros, Recursos Humanos, Relaciones Internacionales y el Fiscal Jefe de la provincia de La Habana, encabezados por Marlen Fernández Machado, Vicefiscal General de la República.





Con el objetivo de propiciar el intercambio de experiencias entre los participantes y contribuir a la solución de los disímiles problemas que se presentan en el quehacer jurídico, sesionó el Segundo Evento Científico Nacional de la Fiscalía General de la República, durante los días 5 y 6 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Cojimar en La Habana.

En este encuentro, el Doctor Juan Mendoza Díaz, Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y Profesor Titular de Derecho Procesal impartió la Conferencia Magistral “Retos del Derecho Procesal Contemporáneo”, la cual resultó de gran relevancia por la actualidad del tema abordado y la importancia en la aplicación práctica para el ejercicio de la función fiscal.

El programa científico incluyó más de 30 ponencias, relacionadas con la Materia Penal, donde se incluye el enfrentamiento a la criminalidad organizada y la corrupción administrativa, también otras vinculadas con la Materia Civil, Familia y Menores, en las cuales se abordó el papel de la fiscalía en la protección y defensa de los menores de edad en Cuba, de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. De igual forma, se debatieron trabajos relacionados con la Comunicación Institucional y los procesos de Dirección en la Fiscalía General, los que contribuyen al fortalecimiento y perfeccionamiento de la labor de la institución.

Los trabajos presentados se seleccionaron en las jornadas territoriales, desarrolladas en el primer semestre del año en Guantánamo, Camagüey, Sancti Spíritus y Mayabeque, por su calidad, actualidad y aplicación práctica. Además, este evento constituyó la antesala del XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad de la Fiscalía General de la República, a celebrarse en marzo de 2016.

Participaron en esta segunda edición el Consejo de Dirección Ampliado de la Fiscalía General de la República, una representación de fiscales jefes municipales, de



## Un encuentro con el conocimiento

### SEGUNDO EVENTO CIENTÍFICO NACIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL

la Fiscalía Militar y profesionales de otras especialidades de esta institución. Además, asistieron como invitados: Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado; Joaquín Bernal Rodríguez, funcionario del Comité Central del Partido, representantes de la Contraloría General, el Tribunal Supremo Popular, los ministerios de Justicia y del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la Unión de Juristas, la Universidad de La Habana y la Escuela Militar Superior Comandante Arídes Estevez.

**JESSICA RIVERO RODRÍGUEZ**  
Periodista  
Fiscalía General de la República



## Los trabajos premiados fueron:

- “La cadena de custodia y la prueba ilícita” de la autora y MSc. Emma Calderón Arias (profesora de la Facultad de Derecho/ Universidad de La Habana).
- “La Criminalidad Internacional del Lavado de Activos y su regulación en Cuba” presentada por la Licenciada Isabel María Pérez Quintero, Fiscal asistente de la Fiscalía provincial de Sancti Spiritus.
- “Modificaciones de las funciones del fiscal en aras del principio de celeridad del proceso penal” por el especialista Lázaro Esteban Guzmán Díaz, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Pinar del Río.
- “De la corrupción administrativa a la delincuencia económica: consecuencias de la actualización del modelo económico cubano en el Derecho Penal” presentada por el profesor de la universidad de Holguín, Manuel Alberto Leyva Estupiñán.
- “Intervención de la Fiscalía General de la República en los fenómenos que se originan en el comportamiento de las Cooperativas No Agropecuarias en Cuba” de la Lic. Yulian Solan Traba, Fiscal municipal Cienfuegos.
- “El delito de tráfico ilícito de personas en Cuba y la necesidad de su actualización en el Código Penal”, presentada por la estudiante de Derecho Yisel Rojas Cristo de la Universidad de Sancti Spiritus.
- “Protección de los derechos del ciudadano adulto mayor. Un reto para la Fiscalía General de la República” presentada por su autora la MSc. Asseneth Verdecia Rodríguez, fiscal provincial de Santiago de Cuba.
- “El reconocimiento de los hijos. Una relectura a algunos artículos de la Ley del Registro del Estado Civil en beneficio de nuestra infancia”, presentado por la Especialista Idania Silot Navarro, Fiscal Jefa Departamento de asuntos civiles, administrativos, laborales y otros de la Fiscalía General de la República.
- “La representación por el Fiscal de los menores de edad en sustitución de padres y tutores. Aciertos y desaciertos de la legislación cubana actual” presentada por la Lic. Ládins Ricardo Soria, Vicefiscal municipal de la Fiscalía de Santiago de Cuba.
- “Eficacia de la representación legal del Adulto Mayor institucionalizado. ¿Ficción ó realidad?”, presentada por la Esp. Milagros Rodríguez Estrada, fiscal de la provincia de Villa Clara.
- “El papel del fiscal jefe municipal en la planificación y ejecución de las verificaciones fiscales e investigaciones”, del Lic. Eloany Diago Romero, Fiscal Jefe Municipal de Cárdenas.
- “Diagnóstico de Comunicación Interna y Diseño de un Manual de Gestión de la Comunicación Interna para la Fiscalía Municipal de Trinidad” presentada por la MSc. Yanelkis Hernández Pichs.
- “Implementación de un modelo teórico metodológico para perfeccionar el diagnostico criminológico en la fiscalía militar de región, a partir de las bases teóricas de la previsión científica. Los métodos de diagnosticación y pronosticación criminológica estadística y prospectiva”, del Capitán Johanner Hernández Figueredo, de la Fiscalía Militar de Camagüey.

En esta Edición Especial de la revista se presenta un resumen de algunos de los trabajos premiados.

# RESUMEN DE LAS PONENCIAS

## LA CADENA DE CUSTODIA Y LA PRUEBA ILÍCITA

A través de la historia con los sistemas de enjuiciar y sus particularidades, se valoró en una de dichas etapas la confesión como la reina de las pruebas, y el actuar en el proceso de enjuiciamiento se encontraba desprovisto de garantías. En esos momentos se obtenían los elementos de prueba de forma contraria a los derechos y libertades de las personas, aspecto que resulta de mucho interés para esta investigación, ya que en la doctrina, cuando de cadena de custodia se habla y de sus eslabones o etapas, al violarse alguna de ellas traerá consigo determinadas consecuencias, y uno de los puntos en los que deriva es la ilicitud de la prueba, con la consiguiente nulidad o anulabilidad del acto. En este espacio estaremos ubicados en la trascendencia del significado de la prueba ilícita para la cadena de custodia.

Siendo así, con la valoración de las garantías y un proceso penal acorde a los límites establecidos por los derechos fundamentales, resultado del movimiento iluminista con las ideas de igualdad y humanismo, es que se fue poco a poco democratizando el proceso penal, el cual empezó a convertirse en una verdadera contienda entre partes, más cercano al ideal del debido proceso, con mecanis-

**MSc. EMMA CALDERÓN ARIAS**

PROFESORA FACULTAD DE DERECHO  
UNIVERSIDAD DE LA HABANA



mos de amparo para el acusado y demás sujetos del proceso, de conjunto con la conformación del sistema mixto.

Este trabajo hizo énfasis en la prueba ilícita y sus aspectos conceptuales, tipologías de prueba ilícita, criterios de clasificación y la prueba lícita y el rango de la norma quebrantada.

## Conclusiones

La cadena de custodia supone etapas que transcurren en aras de que sean válidas las fuentes de prueba obtenidas en la investigación del hecho con caracteres de delito, y precisamente de lo que sucedería en caso de violar alguno de esos actos relativos a las fases.

Resulta muy controvertido el debate sobre los efectos derivados de la ruptura de la cadena de custodia, en ese punto expresa Figueroa Navarro que en principio son las autoridades policiales y judiciales las que garantizan la preservación de la prueba, y quien afirme la ruptura de la cadena de custodia debe probarlo. No debe admitirse como premisa, de la que parten los recurrentes, de que en principio hay que presumir las actuaciones policiales como ilegítimas e irregulares, vulneradoras de derechos fundamentales, mientras no conste lo contrario, debiendo plantearse la ruptura de la cadena de custodia acompañada de un nivel de concreción importante, como por ejemplo en materia de drogas sostener que la sustancia analizada en el peritaje valorado como prueba de cargo no es la que la policía ocupó al acusado en el momento de su detención; en otras ocasiones se interesa la nulidad de la prueba de ADN, concretándose en la fase de recogida de los objetos de los que se extrae la muestra, alegando posible contaminación, poniéndose en entredicho la cadena de custodia, entre otros tantos casos.

Siendo así, afirma Hernández - Romo Valencia<sup>1</sup> al referirse a la ruptura de la cadena de custodia que no siempre traerá como consecuencia, que la prueba quede excluida, siempre que se logre acreditar que la prueba no fue alterada o modificada.

Por lo que para Del Pozo Pérez<sup>2</sup> la prueba tiene que haberse producido con

las exigibles garantías procesales, debe haberse obtenido por tanto, con observancia de la normativa relativa a la obtención de fuentes de prueba, tanto en lo relativo a las normas de enjuiciamiento como a los principios, derechos y garantías constitucionales.

Y en este sentido es importante señalar que se distinguen tres tendencias entorno a la prueba ilícita, la relativa al derecho a un proceso con todas las garantías por lo que toda prueba que vaya en su contra es rechazada y declarada ilícita; la del efecto preventivo o disuasorio de exclusión o exclusionary rule, deviene de la doctrina del fruto del árbol envenenado, y todo lo que derive de una prueba obtenida con vulneraciones de derechos y garantías se declara ilícita de facto; y, la de la conexión de la antijuridicidad, en tanto la prueba obtenida violando derechos fundamentales lo que derive de la misma se considera como ilícita y excluida, pero sólo en determinadas circunstancias, las cuales partes de la conexión de antijuridicidad (conexión de causalidad en lo antijurídico entre la lesión ocasionada y las pruebas obtenidas). Por lo que el rango de la norma quebrantada es uno de sus pilares, resultando nulas aquellas pruebas que vulneren directamente los derechos fundamentales, y anulables las que contravengan una norma de menor jerarquía, dígase ley especial o cualquier otra normativa, en tanto este actuar podrá ser subsanable durante el transcurso del proceso.

Para que sean admitidas las pruebas en el proceso convergen tres posturas, la de la admisibilidad o no de la prueba ilícita, y una intermedia, en el caso de admitir (admisión, validez y eficacia) de las pruebas obtenidas ilícitamente, sin tener relevancia alguna el modo de obtención de las mismas, igual van a ser admitidas; la teoría de la no admisibilidad y apreciabilidad de la prueba ilícitamente obte-

<sup>1</sup> Hernández - Romo Valencia, Pablo, op. cit. p. 16

<sup>2</sup> Del Pozo Pérez, Marta, op. cit. p. 152

nida, donde se valora como importante el modo de obtención de las mismas, y una teoría intermedia donde se analiza la admisibilidad y apreciabilidad de las pruebas obtenidas de forma ilícita según la ponderación de intereses en conflicto.

## BIBLIOGRAFÍA

- Del Pozo Pérez, Marta (2014): *Diligencias de investigación y cadena de custodia*. Editorial Jurídica Sepin. Madrid, España.
- Figueroa Navarro, Carmen (2015): *La cadena de custodia en el proceso penal*. EDISOFER s.l. Madrid, España.

# LA CRIMINALIDAD INTERNACIONAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SU REGULACIÓN EN CUBA

**E**ncubrir el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades delictivas, insertándolos en el mercado formal a través de operaciones bancarias o de otra índole, constituye el principal modus operandi del delito de Lavado de Activos, considerado de lesa humanidad, al poner en riesgo las instituciones financieras y con ello la estabilidad de las naciones, cuya incidencia internacional se ha incrementado en los últimos tiempos, en virtud al desarrollo tecnológico, siendo así que bajo el título: “La criminalidad internacional del Lavado de Activos y su Regulación en Cuba” se efectuó esta investigación, pues considerando que la tarea de enfrentamiento a este flagelo, debe ser una prioridad de extrema urgencia, encaminándola a determinar si se encuentra atemperado nuestro sistema jurídico a las normas internacionales vigentes en dicha materia, como el Objetivo General, para lo cual se pusieron al descubierto los caracteres y aspectos más relevantes de esta figura delictiva, explicándose el proceso en que

**LIC. MARIANNE PEÑARROCHE BETANCOURT**

ponente:

**LIC. ISABEL MARÍA PÉREZ QUINTERO**

FISCAL ASISTENTE

FISCALÍA PROVINCIAL SANCTI SPÍRITUS





se desarrolla y las etapas por las que transita, asimismo las técnicas más empleadas y algunas estrategias que ayudarían a su prevención; efectuando análisis de los principales instrumentos jurídicos que se han adoptado a nivel global, evaluando finalmente el tratamiento administrativo y jurídico penal que se le ha dado a este ilícito en la legislación cubana.

Este trabajo consta de 3 capítulos. El capítulo no.1 referido a algunas consideraciones generales sobre el lavado de activos, las técnicas para lavar dinero, las estrategias para la prevención del lavado de Dinero.

El capítulo no.2 nos acerca a la regulación internacional del lavado de dinero y a las organizaciones que lo combaten”.

Asimismo en el capítulo No. 3 se trata el tema del lavado de dinero en Cuba.

## Conclusiones

1. El lavado de activos es un delito de lesa humanidad que acarrea un elevado costo social y económico para las naciones que lo sufren y consiste en enmascarar las ganancias ilegales obtenidas procedentes de la comisión de delitos graves, dándoles una apariencia de legitimidad, se desarrolla como un proceso que transita por diversas etapas, en las que la utilización del Sistema Financiero siempre está presente y los países que se encuentran más proclives a este fenómeno son los que tienen paraísos fiscales y un estricto secreto bancario.
2. El delito de lavado de activos, se encuentra en constante crecimiento mundial, constituyendo la forma que utiliza la criminalidad organizada para sustentar sus actividades ilícitas en el ámbito transnacional, es por ello que para lograr su prevención y enfrentamiento eficaz, la Comunidad Internacional, ha realizado esfuerzos considerables tanto aduaneros como financieros y ha promulgado diferentes instrumentos que regulan dicha modalidad delictiva de forma amplia y clara, restando entonces que las naciones implementen los mismos para que se alcancen los fines que se persiguen con dichos instrumentos.
3. Cuba contempla dentro del Sector Bancario, regulaciones administrativas para la detección y combate de operaciones de lavado de activos, sin embargo la respuesta de enfrentamiento a este fenómeno, no se puede quedar en este orden, pues el Derecho de Última Ratio tiene que intervenir necesariamente, para que se alcance la punición penal de los actos cometidos.
4. A pesar de que el lavado de activos, muestra rasgos que pudieran equipararlo a alguna modalidad de recepción o de encubrimiento, por suponer la realización de un delito previo, es un delito completamente autónomo e independiente, pues la consideración de autor del mismo, es perfectamente atribuible al comisor del hecho primario, lo que no resulta factible en los ilícitos mencionados, ya que es imposible cometer el hecho inicial y el que se pretende encubrir o receptar a la misma vez.
5. El delito de lavado de activos se regula en el Ordenamiento Jurídico Cubano de forma acertada, encontrándose a tono con lo preceptuado internacionalmente al respecto, no obstante pudiera incluirse la modalidad agravada consistente en que los sujetos activos actúen como funcionarios del sector bancario o financiero, faciliten la ejecución del acto criminal.

## MODIFICACIONES DE LAS FUNCIONES DEL FISCAL EN ARAS DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD DEL PROCESO PENAL

**E**n el informe técnico se refleja el resultado de una investigación sobre el estado del arte de la celeridad del proceso penal dentro del debido proceso, específicamente vinculado con la incidencia de las funciones que desempeñan los fiscales en Cuba en la fase preparatoria del juicio oral, elaborándose los fundamentos que amparan posibles modificaciones a mediano plazo de la Constitución de la República y de la Ley de Procedimiento Penal para profundizar en el derecho a un proceso penal eficaz de imputados, víctimas y perjudicados dentro del estándar internacional acorde con lo más avanzado de la ciencia penal.

Fue realizada mediante el criterio metodológico de la concepción dialéctico materialista, que sustenta la utilización de métodos que integran lo cuantitativo y lo cualitativo, tanto teóricos como empíricos (análisis de documentos, observación propia, encuestas, derecho comparado, análisis estadístico), así como las técnicas generalmente aceptadas para la solución de problemas en la Administración Pública, como el Diagrama de Ishikawa, Pareto y el análisis estructural a través de la perspectiva estratégica, entre otras.

Se revela la problemática y objetivo general partiendo de efectuar un diagnóstico en el país sobre el estado de cumplimiento de la celeridad en la fase preparatoria del juicio oral e incidencia de las funciones actuales reconocidas legalmente a los fiscales, lo cual posibi-

**ESP. LÁZARO ESTEBAN GUZMÁN**

*FISCAL JEFE*

*FISCALÍA PROVINCIAL PINAR DEL RÍO*



litó determinar las causas que inciden en dilaciones de la investigación penal relacionadas con funciones asignadas por la ley a los fiscales, apreciándose la necesidad de buscar vías alternativas hacia nuevas funciones.

La investigación aporta los elementos a modificar en las funciones de los fiscales para garantizar un proceso penal justo, garantista y eficaz, partiendo de normati-

vas internacionales acogidas por nuestro país que establecen la necesidad de establecer plazos razonables para culminar el proceso penal como uno de los derechos humanos fundamentales dentro del debido proceso penal, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia Penal de la ONU (Reglas de Mallorca) y las Directrices de la ONU sobre las Funciones de los Fiscales.

Palabras claves: celeridad proceso penal; funciones de los fiscales, debido proceso, derechos humanos.

El primer capítulo hace un profundo análisis sobre las consideraciones acerca de la relevancia pública del principio de celeridad en el proceso penal a la luz de referencias internacionales.

El segundo capítulo trata el tema sobre las modificaciones de las funciones del fiscal en aras del principio de celeridad del proceso penal.

## Conclusiones

1. La celeridad y eficacia del proceso penal constituye un reto y una obligación para cualquier Estado de Derecho, por lo que resultan referencias para las medidas de política criminal y por tanto para la Administración Pública en Cuba, situada en un entorno y contexto que transita hacia la modernización del Sistema de Justicia Penal.
2. El diagnóstico realizado sobre el estado actual del cumplimiento del principio de celeridad en la fase preparatoria del juicio oral en torno a las funciones legales de los fiscales, evidenció la necesidad de cambiar paradigmas en el procedimiento penal actual y en la actuación de los fiscales en Cuba, lo que nos obliga a desaprender de nosotros mismos.
3. Se evidenció que el Fiscal General de la República desde antes de 2014 dispuso un conjunto de medidas y acciones efectivas para erradicar las causas organizativas, estructurales, materiales, de recursos humanos y de sistema de trabajo que afectaban la celeridad del proceso penal en la fase preparatoria del juicio oral.
4. Las causas que limitan la celeridad del proceso penal en la fase preparatoria del juicio oral relacionadas con funciones legales de los fiscales nos permitió seguir un mapa de ruta para el cambio y aportar elementos que contribuyan a modificaciones que posibiliten perfeccionarlas para contribuir a la modernización de nuestro Sistema de Justicia Penal y profundizar su carácter garantista de respeto a los derechos fundamentales de las personas en el proceso de actualización del modelo económico-social cubano.

# DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA A LA DELINCUENCIA ECONÓMICA: *consecuencias de la actualización del modelo económico cubano en el Derecho Penal*

**E**l individuo en su deseo de satisfacer sus necesidades se ve compulsado a adoptar una conducta práctica que aún no tiene respaldo legal ni reconocimiento oficial, compra y vende, participa en el mercado negro y busca fuentes alternativas de ingresos que en muchos casos pueden estar determinados en el ejercicio de sus funciones institucionales. Esta contradicción entre la realidad social y lo que está instituido se re-produce en la conciencia social, provocando un desdoblamiento -de este elemento de la conducta a lo que llamamos la doble moral.

Dejemos establecidos que cuando nos referimos a la corrupción estamos hablando de la administrativa, de cualquier tipo de abuso que ejecute algún funcionario público, de la autoridad que le ha sido conferida por el Estado, para poder servir al pueblo, lo cual hace con el fin de conseguir alguna clase de lucro o beneficio, para sí o para otra persona<sup>1</sup>.

Es decir, que su conducta se aparta del cumplimiento estricto de sus obligaciones de carácter público, normales, debido a intereses personales, familiares o de allegados, o con el fin de obtener o conceder, ilegítimos beneficios monetarios, materiales, o de orden social; o que viola las normas respecto al uso de cierto tipo de influencias, con fines personales.

**LARISBEL LUGO ARTEAGA**

ponente:

**MANUEL ALBERTO LEYVA ESTUPIÑÁN**

PROFESOR UNIVERSIDAD HOLGUÍN



La corrupción como resultado de la conducta consciente de los hombres adquiere dimensión universal, en la medida que se tolere. El fenómeno en sentido general ha sido categorizado por Naciones Unidas como: “La contracara del desarrollo”, por las consecuencias perniciosas que trae para el desarrollo del mundo y la práctica de las buenas costumbres, pues en primer lugar, causa enormes costos económicos, finalmente

<sup>1</sup> Bodes Torres, Jorge *El enfrentamiento a la corrupción por los tribunales*.



soportados por el ciudadano, genera inestabilidad política y desconfianza en el sistema, pervierte el desarrollo económico e impide o dificulta el progreso de las naciones, lleva a la arbitrariedad y al desprecio de la primacía del Derecho, aumenta el poder de la criminalidad organizada, propicia la desintegración social, destruye los fundamentos morales de la sociedad, atenta contra los derechos humanos y la dignidad de la persona, mina los cimientos del Estado, al romper el vínculo de fidelidad de gobernantes y gobernados, y es capaz de socavar los fundamentos de la democracia.

Su enfrentamiento depende de las condiciones sociopolíticas y económicas de cada país, las que aportan los gérmenes para su desarrollo por lo que las formas de aparición son distintas en cada lugar y comprende una amplia variedad de temas, preocupaciones y problemas, apenas vinculadas por un nombre común del que su análisis resulta un conjunto muy complejo de perspectiva.

La profundidad de este flagelo se ve agravada en las condiciones actuales por la globalización neoliberal, el individualismo y la degradación moral y ética de los valores que engendra el capitalismo. Esto podría conducirnos a pensar que nuestro proyecto social, por sus características está exento de este fenómeno, que no es posible que funcionarios, a los que le han dado un determinado grado de confianza por su conducta social, moral y política incurran en actividades delictivas enmarcadas en la obtención de beneficios a partir de las responsabilidades que le han asignado. Pero ello no es así, si bien la corrupción dejó de ser una preocupación a partir del triunfo de la Revolución con el logro de un clima de

justicia social, hoy lo es y se -ha convertido en centro de nuestros debates.

Las manifestaciones de corrupción administrativa se han incrementado en los últimos años en la sociedad cubana, a partir de la crisis económica de los años 90 y en los momentos actuales alcanza dimensiones considerables, por lo que no son pocos los procesos que se realizan para juzgar hechos de esta naturaleza, en los que se han visto involucrados funcionarios de los diferentes niveles, incluso de los niveles centrales de dirección del país. A esta situación problemática se une la tolerancia social que con relación al fenómeno se viene percibiendo, convirtiéndose en una brecha para la expansión del delito y las ilegalidades. Es por ello que resulta imprescindible abordar el tema que nos ocupa desde una perspectiva jurídico-social, identificando las causas que generan e incrementan este tipo de delincuencia, lo cual permitirá enfrentar el fenómeno antes de que se manifieste a partir de acciones preventivas, sin que sea necesario llegar a la vía jurídico-penal.

A partir del 6to congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en abril del año 2010 y la aprobación de los Lineamientos en la Política Económica y Social se han ido produciendo un grupo importante de modificaciones legislativas, así como la aparición de nuevos escenarios, fundamentalmente en el ámbito económico. Estas transformaciones definidas conceptualmente<sup>2</sup> como actualización del modelo económico han producido variaciones en la estructura social del país, y consecuentemente han traído y traerán cambios en la estructura social.

A nuestro modo de ver -desde el punto de vista del Derecho Penal- se está pro-

<sup>2</sup> El término actualización del modelo económico y no cambio en el modelo tiene renombrados detractores en el ámbito teórico. No obstante los argumentos-serios y creíbles- en favor de utilizar el término actualización parte del hecho de que estas medidas fueron originalmente implementadas a principios de los 90, en medio del llamado Periodo Especial y con el fin de reflotar la estancada economía cubana que había perdido cerca del 36% del PIB y cerca del 75% de su comercio exterior con los países del CAME. El Trabajo por Cuenta Propia, la Inversión Extranjera, las UBPC, despenalización de la tenencia de divisas y otras medidas fueron implementadas en los duros años de esta década del 90. Desde esta postura hoy se actualizan las mismas y se implementan otras enfocadas en el mismo problema.

duciendo un tránsito desde los delitos asociados a la corrupción administrativa hacia formas novedosas para el país de delincuencia económica.

En este trabajo se ahonda en las valoraciones teóricas sobre la corrupción sus causas y consecuencias, la regulación internacional, las medidas institucionales contra este flagelo, las tipicidades delictivas asociadas a este proceso.

## Conclusiones

1. A nivel internacional el Derecho Penal continúa evolucionando y expandiéndose hacia nuevas formas de combate formas de la criminalidad, y lamentablemente, lo anterior no implica un mayor respeto a las garantías y derechos de los procesados.
2. En Cuba a partir del año 2010 se han incrementado los procesos penales por delitos asociados a la corrupción

administrativa. De igual manera se han ido insertando mecanismos institucionales y legales que atacan varias de las causas estructurales que propiciaban el fenómeno.

3. La actualización del modelo económico cubano y las diversas medidas implementadas, que pueden ser consideradas parte de la política criminal del país, inciden de manera indirecta en el Derecho Penal. Se puede estar produciendo un tránsito desde la comisión frecuente de tipicidades delictivas asociadas a la corrupción administrativa hacia tipicidades propias de la delincuencia económica o los llamados delitos de cuello blanco.
4. Para los operadores del Derecho Penal, constituye un reto esta delincuencia económica, considerando la complejidad de la misma, y sobre todo, que puede estar conectada con la criminalidad organizada a nivel mundial.

---

### BIBLIOGRAFÍA

- BODES TORRES, Jorge *El enfrentamiento a la corrupción por los tribunales.*

# INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LOS FENÓMENOS QUE SE ORIGINAN EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS EN CUBA.

Uno de los cambios más significativos que se gestan en la sociedad cubana como parte del proceso de actualización del modelo económico, lo constituye la expansión del sector empresarial no estatal. Tal término se refiere no solo a formas de propiedad privada,<sup>1</sup> sino también a aquellas en las que interviene la propiedad colectiva como las cooperativas<sup>2</sup>. La implementación de las nuevas formas de gestión económicas no significa que una empresa administrada por personas que no sean representantes de instituciones estatales no tiene que ser, necesariamente privada, es decir, responder solo a intereses individuales estrechos o contradictorios con necesidades y expectativas de la sociedad en general. El asunto clave para una sociedad comprometida con la construcción socialista, donde el crecimiento económico no es un fin sino un medio al servicio de la sociedad, es precisamente cómo hacer que el sector no estatal responda a intereses sociales. El propósito de la investigación es reflejar la necesidad de intervención de la Fiscalía General de la República

**LIC YULIAN SOLAN TRABA**

FISCAL

FISCALÍA MUNICIPAL CIENFUEGOS



en los fenómenos que se suscitan en el comportamiento de las Cooperativas No Agropecuarias.

El trabajo analiza el movimiento cooperativo en Cuba, cuál es el tratamiento por las diferentes doctrinas jurídicas, su análisis y regulación en el Decreto Ley 305/12. Analiza también la evolución his-

<sup>1</sup> Existen formas de propiedad privada simple (autoempleo o empleo familiar, sin contratación de fuerza de trabajo asalariado permanente) y no simple (empresas con contratación de fuerza de trabajo asalariado permanente).

<sup>2</sup> La cooperativa es una forma de la propiedad colectiva: ni privada ni estatal. Véase Jesús Cruz Reyes y Camila Piñeiro Harnecker. Una introducción a las cooperativas, en Camila Piñeiro Harnecker, ed., Cooperativas y socialismo: una mirada desde Cuba, Editorial Caminos, La Habana, 2011, p. 34.

tórica del tratamiento a las Cooperativas en el Derecho Comparado y la posibilidad de que ante la identificación de riesgos se establezcan vías para su solución desde el trabajo de los fiscales. Los métodos que

se utilizan fueron: el histórico lógico, el de análisis y síntesis, el exegético analítico y el jurídico comparado. La técnica que se utiliza es el análisis de contenido y documentos.

## Conclusiones

1. El cooperativismo posee como antecedente inmediato, la cooperación comunitaria en la cual basaban las relaciones económicas y sociales de la comunidad primitiva. La misma desapareció a medida que surgió la división del trabajo, la propiedad privada y por ende el surgimiento del Estado.
2. La doctrina cooperativa se basa en tres conceptos fundamentales: igualdad, libertad y solidaridad.
3. La pluralidad de movimientos cooperativos en América Latina son atribuidas al contexto histórico, la diversidad en el ámbito cultural, económico, social y político; además las particularidades ideológicas de cada región geográfica.
4. Los principios que refrenda el Decreto-Ley 305/12 “De las Cooperativas no Agropecuarias en Cuba” precisan de su ampliación ya que no refieren la autonomía e independencia que tal tipo de asociación requiere para ejercitar sus relaciones jurídicas con mayor productividad, por lo que deben ser incorporados otros como: el de integración abierta, independencia, distribución de las ganancias de acuerdo al trabajo realizado y de constituirse sin fines especulativos o que supongan la ganancia fácil; que garantizan distinción de su naturaleza jurídica en relación con otras asociaciones.
5. Los fundamentos teórico-jurídicos que hacen necesaria la intervención de la Fiscalía General de la República en los fenómenos que se originan en el comportamiento de las Cooperativas No Agropecuarias en Cuba son:

*La exposición a determinados riesgos y problemáticas entre los que se encuentran: la expansión de prácticas y valores capitalistas; la orientación de la actividad económica hacia la ganancia en lugar de hacia la satisfacción de intereses sociales; la exclusión de Principios Cooperativos generales en el Decreto Ley 305/12, que atentan contra su correcto funcionamiento; manifestaciones de indisciplinas sociales e ilegalidades, tendencias a la concentración de riquezas, incorrecta interpretación de las relaciones de comercio entre empresas no estatales y su vínculo con el sector estatal y la necesidad de instituciones de control, fiscalización y supervisión.*

6. La intervención de la Fiscalía General de la República en el enfrentamiento de los fenómenos que se originan en el comportamiento de las Cooperativas No Agropecuarias tienen su expresión principal en las verificaciones fiscales sectorializadas, lo que conllevaría a una mayor protección de los intereses sociales y estatales, así como la salvaguarda de su naturaleza jurídica.



# EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS EN CUBA Y LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL

**E**l tráfico internacional de personas constituye cada vez más un flagelo en expansión, que amenaza no sólo el normal tráfico migratorio, sino que se esconde dentro de otras figuras y puede ser cometido por personas independientes, pero casi siempre por su propio carácter de delito transnacional es propio de redes del crimen organizado y no está obligatoriamente vinculado a la explotación sexual ni laboral, sino que constituyen elementos imprescindibles de la figura: el cruce ilegal de fronteras y el ánimo de lucro de los traficantes, que se aprovechan de las penurias que sufren millones de seres humanos en los países pobres, para obtener fáciles ganancias. En los últimos veinte años se ha producido un incremento significativo del tráfico ilegal de personas, por aire, mar y tierra, lo que ha llevado a la Comunidad Internacional y a los Estados Nacionales a adoptar medidas para combatir este flagelo de la humanidad, que al vincularse a las redes del crimen organizado transnacional constituye, en la actualidad, una de las actividades más lucrativas, junto al tráfico de drogas y el de armas.

Cuba ha adoptado medidas legislativas para prevenir y combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito de migrantes, a partir de la vigencia de la Ley No. 87 de 1999, que le añadió al Código Penal el Título XV sobre los Delitos Contra el Normal Tráfico Migratorio, que ha servido para enfrentar con éxito los crecientes hechos de salidas ilegales vinculadas a redes criminales, que se aprovechan de

**YISEL ROJAS CRISTO**

*ESTUDIANTE DE DERECHO*

*UNIVERSIDAD UNISS "JOSÉ MARTÍ PÉREZ"*

*PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS*



los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano y de la política del Gobierno de los Estados Unidos de favorecer la emigración ilegal y dificultar las vías legales.

En el trabajo se analizan los criterios jurisprudenciales y de la doctrina, en relación con los tipos penales regulados en los artículos 347 y 348 del Código Penal cubano y se realizan las recomendaciones correspondientes para su perfeccionamiento, en futuras modificaciones legislativas.

En esta ponencia se abracan las normas penales sobre el tráfico de

personas. También se hace un análisis sobre el delito de tráfico de personas en la legislación penal cubana y la incidencia de este flagelo en Cuba.

## Conclusiones

1. A más de una década de vigencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobada en Palermo y del Protocolo complementario contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, un significativo número de países no han regulado aún adecuadamente en su Derecho interno la figura del tráfico de personas, dando lugar a que continúe la confusión conceptual que existe en torno a este delito, a pesar de ser Estados parte de estos importantes instrumentos jurídicos internacionales.
2. Las normas del Derecho internacional y del interno, relativas al tráfico de personas de un Estado a otro demandan una protección jurídica integral y una correlación entre ellas, buscando una normatividad uniforme del Derecho y de quienes lo aplican, con énfasis fundamental en la prevención, en lo que la divulgación de los sufrimientos de las víctimas del tráfico de personas, pueden desempeñar un importante papel.
3. Nuestro país, que ha realizado esfuerzos para regular de forma ordenada y segura el tráfico migratorio, ha sido víctima de numerosas agresiones y maniobras por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que van desde la suspensión de los vuelos normales y las salidas legales hacia ese país, a finales del año 1962 y la aprobación de la denominada Ley de Ajuste Cubano del 2 de noviembre de 1966, hasta la aplicación sistemática de una política de estímulo y asistencia a la emigración ilegal desde Cuba y de aplicar numerosas restricciones a las vías legales.
4. El Código Penal cubano regula la figura del tráfico de personas desde el mes de febrero de 1999, con antelación a la vigencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que a pesar de las deficiencias de orden técnico que contiene en la redacción de los tipos penales, nos ha permitido enfrentar las acciones de los traficantes, que desde el exterior o en el propio país realizan diversas acciones encaminadas a promover las salidas ilegales con ánimo de lucro.

# PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO ADULTO MAYOR. UN RETO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**E**n la actualidad, no son pocos los que perciben la vejez como una desgracia, angustia o vergüenza, pues los que siguen este criterio identifican ser viejo con la distancia, alguien inservible o algo malo, lo que nos conduce a los que algunos investigadores han denominado entorno “gerontofóbico”.

Esta imagen negativa está basada en la construcción social y cultural del envejecimiento y del no reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derechos. Sobre esta base negativa se construye la discriminación por edad (abandono, olvido, despojo, maltrato físico y violencia, indiferencia, exclusión de roles, negación de espacios), lo que trae aparejado un estigma que se describe del modo siguiente: pasividad (pérdida de capacidad productivas y jubilación, pérdida de capacidad económica que indica pobreza); ruptura social y aislamiento (pérdida progresiva de funciones); enfermedad (decrepitud, envejecer con patologías de orden físico y biológico); deterioro (cambios somáticos y funcionales confundidos con el lugar que se ocupa en la sociedad); carga (dependencia económica, instrumental y emocional); vejez asexual (falta de deseo asociada a la incapacidad física).

La construcción de esta imagen se sustenta en valores culturales transmitidos y aprendidos, en el imaginario de una sociedad asentada en la productividad de jóvenes y adultos con capacidad de producir y poder; miedo al estigma y a la inseguridad que provoca llegar a la vejez.

**MSc. ASSENETH VERDECIA RODRÍGUEZ**

FISCAL

FISCALÍA PROVINCIAL SANTIAGO DE CUBA



Si cierto es que en algunas regiones del mundo se les veneraba, en otras se les aniquilaba según su estado de deterioro. En las sociedades prehistóricas, por ejemplo, el hecho de que hubiera pocas personas de edad avanzada hacía que los viejos adquirieran un valor especial, vivir tanto tiempo no parecía natural y esto ofrecía a los ancianos un matiz sobrenatural relacionado con lo más sagrado; en unos casos los convirtió en brujos y más adelante en sacerdotes; los guerreros eran más respetados mientras estaban en activo, decidían la suerte de sus pueblos y aconsejaban a los líderes más jóvenes a tenor de sus experiencias y sabiduría; a contrario sensu, en los periodos infértiles o con dificultades de subsistencia,

el anciano podía ser eliminado, ya que la incapacidad y la dependencia amenazaban la supervivencia de la mayoría.

En la actualidad, son muchas las organizaciones internacionales que dedican esfuerzos al estudio y protección del envejecimiento poblacional y a la vejez como etapa final de la vida del ser humano, en la búsqueda de opciones viables para el reconocimiento de sus derechos como sujetos activos de los derechos humanos universales y específicos, atendiendo a lo que ya se ha convertido en un fenómeno mundial: el envejecimiento poblacional.

Varios investigadores, desde diferentes puntos de mira, con enfoques criminológicos, penalistas, constitucionalistas, civilistas, clínicos, económicos y sociológicos, han focalizado sus indagaciones y han ofrecido en sus investigaciones sugerencias y aportes en beneficio de los ancianos, debido al notable envejecimiento poblacional mundial, y lo que ello puede representar económica y socialmente para los Estados y Gobiernos contemporáneos y futuros, situación de la que Cuba no está exenta, pues los bajos niveles de natalidad, el fenómeno migratorio y la variable demográfica han perjudicado notablemente el crecimiento de la población cubana de forma acelerada. Actualmente, el 19 % de los cubanos tiene 60 años o más y para el año 2030, el 25% de la población total será mayor de 60 años; Cuba será el país más envejecido de América Latina<sup>1</sup>.

La explicación de este fenómeno se encuentra en el comportamiento que presentan las variables demográficas, fecundidad, mortalidad y migración, las que al combinarse determinan la magnitud y la evolución de una población en el tiempo, aunque estos factores no influyen todos en la misma medida. Asistimos también a importantes cambios en la esperanza de vida de los cubanos, con un aumento de años en relación con la esperanza de vida registrada.

El envejecimiento poblacional exige el aumento de los gastos de la seguridad y la asistencia sociales, los servicios médicos y la atención especializada; plantea retos aún mayores y más difíciles a la sociedad, como son: garantizar su incorporación a la vida social y familiar, considerarlos sujetos activos de su propio desarrollo personal y preparar a la familia y a la comunidad para garantizarles espacios y vías más adecuadas para su incorporación a la satisfacción de sus necesidades y a la formación de proyectos de vida que les permitan continuar su desarrollo particular con calidad. Todas estas cuestiones podemos lograrlas sin pasar al paternalismo, a la compasión, al pensar y decidir por y para ellos y olvidamos que cuando hablamos de adultos mayores estamos hablando únicamente de personas adultas con diversidad de grados de dependencia funcional y/o psicológica que pueden perder autonomía pero no perder la dignidad.

<sup>1</sup> La población cubana lleva varios años en la fase final de la transición demográfica, con bajos niveles de fecundidad y mortalidad y, por ende, bajos ritmos de crecimiento natural. Hace más de treinta años Cuba no cubre la tasa de reemplazo poblacional. Los cambios que experimentan las tasas de fecundidad y mortalidad durante el proceso de transición demográfica no solo afectan al tamaño y al ritmo de crecimiento de la población, sino también a su estructura por edades, que tenderá a envejecer con el paso del tiempo. La proporción de personas de 0 a 14 años ha ido disminuyendo hasta ubicarse alrededor del 17%.

En el país este proceso ha sido muy acelerado y homogéneo. Así, el cambio que se ha producido en la estructura según la edad de la población, nos sitúa ante un fenómeno nuevo: el envejecimiento de la población. Un proceso cuya manifestación más clara es el aumento en términos absolutos y relativos de los ancianos dentro de la población total, y que producirá profundas repercusiones en los ámbitos económico, social e institucional de la sociedad.



## Conclusiones

1. Los adultos mayores son titulares de las obligaciones y los derechos irrenunciables de toda persona, pero sus desventajas, diferencias, carencias biológicas y fisiológicas -propias de su naturaleza-, rasgos de vulnerabilidad y/o dependencia, determinan la necesidad de que se les reconozcan derechos específicos en proporción con sus características y aspiraciones.
2. Los derechos de los ancianos en el ordenamiento jurídico-constitucional cubano, se presentan dentro de una profunda dispersión normativa y por las características específicas de sus titulares, constituyen un grupo de derechos novedoso, que se pudiera calificar de reciente consagración, que ameritan ser considerados derechos subjetivos directamente operativos, que supere los límites que desmeritan la situación del adulto mayor.
3. El Sistema de Garantías existente en Cuba no satisface la protección integral y efectiva de los derechos del adulto mayor del siglo XXI, por lo que se hace imprescindible desde la jurisdicción, buscar de forma práctica, efectiva y eficiente, el modo de dotarlos de instrumentos tutelares especiales de protección de sus derechos, intereses y necesidades, a partir de su imprescindible consagración en el texto constitucional y teniendo en cuenta las exigencias generales para la protección de los derechos humanos.
4. Un elevado índice de protección integral puede alcanzarse si aparejado se amplía la comprensión de los derechos de la ancianidad; los ciudadanos y ellos mismos logran conocer cuáles son los derechos que les asisten como grupo etario y los mecanismos de ejercicio de esos derechos específicos.
5. Se requiere de una gran transformación cultural y social que impliquen cambios de opiniones, actitudes y prác-

ticas que lleven a una imagen más humana del envejecer, que permita además la construcción de una sociedad inclusiva en la que no haya lugar para la discriminación por edad y sí lograr la dignidad y el respeto de las personas ancianas.

## EL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS. UNA RELECTURA A ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL EN BENEFICIO DE NUESTRA INFANCIA.

**ESP. IDANIA SILOT NAVARRO**

*FISCAL JEFA DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y OTROS*

*FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA*



Es la filiación un complejo de relaciones jurídicas entre procreantes y procreados, relación o vínculo que une a la persona con sus dos progenitores o con uno solo.

El estudio y regulación de la filiación ha sido durante siglos tarea muy compleja para las diversas legislaciones. Amplia sigue siendo todavía la discusión que en torno a esta institución se realiza, dadas las diversas formas de enfocar sus distintas facetas, motivado por los cambios que en el orden social, económico, político, etc, se producen en el mundo constantemente.

En el tratamiento del fenómeno de la filiación, existe una tradición jurídica muy antigua que parte de una radical distinción de los hijos en dos grupos diferentes que se forman atendiendo a su origen. La gran distinción se funda en el hecho de que los hijos hayan sido procreados y hayan nacido después del matrimonio de los padres o fuera de este. En el primer caso se habla de filiación legítima y en el segundo de filiación ilegítima. Estos conceptos de legitimidad e ilegitimidad están todavía presentes en las legislaciones de algunos países.

En Cuba, la promulgación del Código de Familia acabó de una vez y para siempre con esta diferenciación y estableció la absoluta igualdad entre los hijos, cualquiera que sea el estado civil de sus padres.

Resulta ser este un tema de tan señalada importancia, que habiendo conocido desde mi cargo de fiscal de Protección de Los Derechos Ciudadanos, de la existencia de miles de niños y niñas que aparecen inscriptos sólo con la filiación materna por no haberse realizado el reconocimiento de los padres, nos motivamos a estudiar este asunto para profundizar en las razones de esta anómala situación en nuestra sociedad, que como se sabe, reconoce el papel y la autoridad de la familia en la formación moral, física y espiritual de sus miembros más jóvenes y ofrece en consecuencia, una especial protección y prioridad al reconocimiento de los hijos.

En este trabajo profundizamos en el

estudio de esta institución del Derecho de Familia, analizando su concepto y evolución histórica, para luego ahondar más en el reconocimiento de los hijos como la materialización de un deber natural de los padres que adquiere relevancia jurídica con la inscripción de aquellos en el Registro del Estado Civil, como acto formal, personal y puro por virtud del cual el que lo hace manifiesta su condición de madre o padre.

Los problemas que presenta el procedimiento para el reconocimiento e inscripción de los hijos en nuestra Ley del Registro del Estado Civil y en su utilización práctica, ocupan también un espacio en este análisis.

De manera tal que nos propusimos como objetivos, caracterizar la institución de la filiación a partir de un estudio histórico, teórico doctrinal, legislativo y comparado y diagnosticar las posibles deficiencias que puedan existir en las normas que regulan el reconocimiento y la inscripción de los hijos y su aplicación práctica.

Para la realización de esta investigación utilizamos el método teórico jurídico, haciendo un análisis de algunas concepciones doctrinales que se tienen sobre el tema, el método de análisis histórico que comprende el estudio del derecho verificando los hechos pasados, el método jurídico comparado, el de análisis exegético con el estudio de las normas jurídicas sobre el tema, el de análisis de documentos.

En nuestro trabajo contamos con bibliografía de autores nacionales y extranjeros, la que fue amplia y de fácil acceso para el estudio histórico del tema, no así en cuanto al esbozo crítico de las normas sobre filiación en nuestra realidad jurídica, para el que nos resultaron escasos los materiales a consultar.

En este trabajo se dan algunas reflexiones sobre la filiación en Cuba en la vieja legislación que precedió al Código de Familia.

## Conclusiones

1. La filiación es una institución que traduce al plano jurídico la generación y delimita las relaciones entre procreantes y procreados, regulando en lo jurídico, en lo político y en lo social parte del estado civil de los hijos.
2. La legislación en materia de filiación anterior al Código de Familia, se basaba en la distinción de los hijos en legítimos e ilegítimos, fundada en el hecho de que hubieran sido procreados dentro o fuera del matrimonio de sus padres y la Constitución de 1940 que fue la más avanzada en la materia, si bien declaró la abolición de la clasificación sobre la naturaleza de la filiación, igualó a los hijos extramatrimoniales y admitió la investigación de la paternidad, mantuvo sin embargo las diferencias entre los hijos matrimoniales a los efectos sucesorios con las mismas distinciones previstas en el Código Civil Español.
3. Nuestro Código de Familia se sustenta en el principio constitucional de igualdad de todos los hijos y posibilita la investigación y determinación de la paternidad a través del ejercicio de las distintas acciones de filiación que se regulan en él y en la Ley del Registro del Estado Civil.
4. El reconocimiento es el acto jurídico por virtud del cual, una persona asume ser el progenitor de otra y puede materializarse mediante la inscripción en el Registro del Estado Civil.
5. Al estudiar el procedimiento establecido en nuestra legislación para el reconocimiento e inscripción de los hijos y habiendo verificado en la práctica su realización advertimos insuficiencias tales como:
  - No precisa la Ley del Registro del Estado Civil, el término de que dispone el registrador para citar al progenitor que debe responder, cuando no existiendo matrimonio, la madre generalmente, aunque puede ser el padre, le imputa la paternidad.
  - La ley del Registro del Estado Civil no se refiere a los motivos en que debe fundarse la impugnación de la inscripción del hijo de padres no casados, que puede realizarse cuando el padre debidamente citado no comparece a aceptar o negar la paternidad, cuestión que sí se precisa para los casos en que exista matrimonio formalizado.
  - El artículo 48 de la Ley del Registro del Estado Civil emplea la palabra impugnación dos veces para referirse a dos momentos procesales distintos, uno a la negativa extrajudicial del padre asumir la paternidad y otro a la impugnación que se puede hacer ante el órgano jurisdiccional.
  - La redacción de los artículos 80 y 81 del Código de Familia origina polémica dado a que el primero permite al hijo que es reconocido siendo menor de edad a impugnar la filiación solo dentro del año siguiente a ser mayor de edad, mientras que el segundo dice que en cualquier tiempo una persona que se crea con derecho a inscribir como suyo al hijo reconocido por otra, podrá hacerlo en cualquier tiempo, sin embargo le exige concurrir conjuntamente con el hijo cuya filiación se litiga, al que solo se le concede un año.
  - Nada se regula en nuestra Ley de Familia ni en la legislación registral, para cuando el progenitor que debe ser llamado por el registrador para que acepte o niegue la paternidad, está fuera del país por ser un extranjero o cubano residente temporal o permanentemente en el exterior o cumpliendo misión internacionalista, existiendo solo una comunicación de la Dirección de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia, respecto a los padres que están cumpliendo misión internacionalista de carácter militar.
  - El artículo 77 del Código de Familia y el 52 de la Ley del Registro del Estado Civil resultan contradictorios en su

redacción, pues el primero confiere la acción para reclamar el reconocimiento de los hijos solo a estos y al padre o madre que ya los haya reconocido con respecto al que no lo haya hecho y el segundo permite hacerlo también al otro progenitor.

- Nuestro Código de Familia no considera la posibilidad de que el fiscal pueda ejercitar la acción para pedir el reconocimiento de los hijos, en determinados casos en que no lo hicieren o no pudieran hacerlo los obligados.
- No se prevé legalmente la posibilidad para que los menores de 18 años que no estén casados reconozcan a sus hijos y en la práctica lo realizan en virtud de dos Dictámenes de la Dirección Nacional de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia, que si bien no se refieren específicamente a esta cuestión, se han hecho extensivos por práctica a ella.
- La exigencia del artículo 40 de la Ley del Registro del Estado Civil, que obliga al o los declarantes a la exhibición del documento de identificación, para poder practicar la inscripción de nacimiento de los hijos sin contemplar ninguna excepción, puede traer como consecuencia que egresen de los centros de salud donde acontecen los nacimientos, muchos niños sin haberse inscripto.
- La falta de precisión que padece la Ley del Registro del Estado Civil, respecto al plazo de que dispone la dirección del centro hospitalario donde se realiza la declaración para la inscripción del nacimiento, para remitir el documento al Registro del Estado Civil, puede ocasionar en la práctica demora en la realización del asiento registral.
- Si bien ni el Código de Familia ni la Ley del Registro del Estado Civil prevén la posibilidad de que el reconocimiento de un hijo se pueda realizar mediante documento público, en la práctica ello es admitido, existiendo al respecto Dictamen de la Dirección Nacional de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia.
- En el reconocimiento de hijos que realizan los ciudadanos extranjeros mediante escritura pública, no se cumple la exigencia del artículo 67 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil referido a acreditar la capacidad legal mediante documento idóneo.



# LA REPRESENTACIÓN POR EL FISCAL DE LOS MENORES DE EDAD EN SUSTITUCIÓN DE PADRES Y TUTORES. ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA LEGISLACIÓN CUBANA ACTUAL

**D**esde los albores del Derecho, la edad ha sido reconocida como una condición humana de vital trascendencia jurídica. Constituye criterio generalizado en la doctrina y la práctica jurídica que teniendo en cuenta la edad y el desarrollo de las facultades físicas e intelectuales, se determina la capacidad de obrar de las personas naturales como sujetos de derecho, pudiendo alcanzar o no la absoluta independencia para regir su persona y administrar sus bienes. Consecuentemente, los sujetos a los que la ley considera menores de edad, que por esa condición natural no pueden valerse por sí mismos, necesitan que se les represente y complete su capacidad de hecho.

La representación de los menores corresponde en principio a los padres como parte del contenido de la patria potestad, institución jurídica que norma las facultades de los progenitores respecto de sus hijos menores de edad y que ha evolucionado hasta la actualidad, convirtiendo lo que inicialmente eran poderes casi absolutos sobre los infantes, en derechos y deberes cuyo desempeño posee como objetivo esencial su protección en todos los aspectos de la vida. Sin embargo suele ocurrir que los progenitores no sean conocidos, fallezcan o por diversas razones no puedan desempeñar la patria potestad, existiendo menores carentes de guarda y representación o afectados por un ejercicio negligente

**LIC. LÁDINS RICARDO SORIA**

VICEFISCAL MUNICIPAL

FISCALÍA SANTIAGO DE CUBA



de las obligaciones paterno-filiales, lo que hace preciso se integre su capacidad limitada. Le corresponde entonces al Derecho prever tales situaciones y proporcionar las posibles soluciones.

Es por ello que los ordenamientos jurídicos deberán contener regulaciones para la sustitución de la patria potestad, creando instituciones y mecanismos que

aseguren la protección de estas personas, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, trasladando la representación legal de los menores a otros sujetos u órganos. Entre las fórmulas desarrolladas para tratar esta problemática se encuentran instituciones como la tutela y la curatela, los defensores y curadores judiciales, o el curador especial, así como la representación de menores por jueces y fiscales en circunstancias o bajo condiciones especificadas en ley. Conscientes de que la institución que por excelencia sustituye la autoridad paterna es la tutela, y teniendo en cuenta que la misma ha sido objeto de reiterados estudios, centramos la presente ponencia en las otras opciones legales para la sustitución tanto de la representación del padre como del tutor.

Garantizar el ejercicio de la capacidad de derecho que es inherente a toda persona con independencia de sus años de vida es un aspecto que reviste suma importancia para el normal tráfico jurídico, atendiendo a que no son pocas las relaciones que pueden suscitarse con la participación de menores de edad. Se reconoce además que, concebir acertadamente las reglas y mecanismos legales que permitan hacer efectiva la representación de niños, niñas y adolescentes, deviene en un derecho pero también se erige en garantía para el ejercicio del resto de sus derechos, y consecuentemente en una forma de darle protección jurídica a la infancia<sup>1</sup>.

Cuba tiene reglada la representación legal de los menores de edad de manera que incluye a padres, tutores judicialmente nombrados y el Fiscal, advirtiéndose que como toda obra humana tal normativa es perfectible a los efectos de garantizar la defensa de los intereses de los niños y niñas. Sin embargo resulta

sumamente polémica en la práctica la representación que asume el Fiscal, atendiendo a sus presupuestos legislativos y la posibilidad de su ejercicio efectivo.

Estas razones motivaron la realización del estudio que se muestra, bajo el título “La representación por el Fiscal de los menores de edad en sustitución de padres y/o tutores. Aciertos y desaciertos de la legislación cubana actual”

El tema que se propone no sólo resulta útil para enfrentar las consecuencias de una paternidad negligente pues, con independencia del ejercicio efectivo de las facultades nacidas de la patria potestad, puede que en determinados actos los padres tengan que proteger sus intereses personales y los de sus hijos menores de edad correspondiéndole al Derecho brindar las vías para la protección del infante.

Con la intención de dar respuesta al problema científico consistente en la deficiente regulación legal de la representación por el Fiscal de los menores de edad en Cuba, y con ello contribuir a la eliminación de las contradicciones normativas que en torno a este tema existen, fue trazado como objetivo determinar las deficiencias legales que inciden negativamente en el ejercicio de la representación de los menores de edad por el Fiscal. Tal cometido nos permite contar con un diagnóstico de las principales deficiencias legales en el ordenamiento jurídico cubano, que trascienden negativamente en el ejercicio de las facultades representativas que la ley confiere al Ministerio Público respecto a los infantes.

En este trabajo se profundizó además sobre la sustitución de la representación que ostentan padres y/o tutores sobre los menores de edad a partir de una visión desde el derecho comparado. Asimismo nos comenta sobre el fiscal como representante legal de los menores de edad en

<sup>1</sup> El artículo 351.3 del Código de Familia de El Salvador, Decreto Legislativo 677 de 11 de octubre de 1993, reconoce entre los derechos fundamentales de los menores tener y conservar desde su nacimiento y en todo momento la representación legal. La Ley de Protección Jurídica del Menor en España refrenda como parte del derecho a ser oído del menor la necesidad de que se le garantice representación legal.

sustitución de padres y tutores y las irregularidades de la legislación cubana.

## Conclusiones

1. La minoría de edad constituye una de las causales de incapacidad de hecho reconocida de manera general por la doctrina nacional y foránea, que como tal consta recogida en la inmensa mayoría de las legislaciones de Latinoamérica incluyendo a Cuba, reconociéndose igualmente que para suplir la incapacidad absoluta o completar la capacidad restringida de los menores de edad, estos deben ser provistos de representantes.
2. Atendiendo a su origen la representación de menores pertenece a la modalidad de la representación legal, la que es concebida como autorización dispuesta por la ley para que un sujeto sustituya a otro en sus relaciones jurídicas fundamentalmente con el objetivo de garantizar el ejercicio de sus derechos y acciones. Las facultades, naturaleza y efectos de esta representación se derivan de la ley y en el caso de los infantes son atribuidas en primer orden a los padres como parte del contenido de la patria potestad y, a falta de estos, a los tutores.
3. En la literatura revisada y en las legislaciones estudiadas se constató que en las regulaciones legales para la representación de menores existe una tendencia a establecer situaciones o supuestos en los que la representación de menores por padres y/o tutores es sustituida por la de otros sujetos, generalmente por presumirse la imposibilidad de su ejercicio o el ejercicio no acorde con los intereses del niño o niña.
4. Entre las situaciones o supuestos que más frecuentemente se refrendan en los legislaciones y que por tanto son analizados por la doctrina se encuentran la ausencia, incapacidad, deceso o negativa de los padres o tutores y la existencia de intereses opuestos entre estos y sus hijos o pupilos o entre hijos o pupilos sujetos a una misma patria potestad o tutela.
5. Los sujetos a los que se les confiere la representación en tales situaciones son diversos en las distintas legislaciones; los más usuales son el nombramiento para determinados actos o momentos de tutores y curadores especiales o específicos, defensores judiciales o asesores de menores y protutores, la previsión de instituciones de asistencia social y en Cuba y el Salvador se le atribuye tal facultad al Fiscal.
6. En Cuba la representación de menores en sustitución de padres y tutores corresponde al Fiscal en virtud de lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral y los artículos 60 y 63 del Código Civil, los que a su vez encuentran respaldo en los artículos 8 inciso g), 18 inciso d) y 52,1,2 inciso a) de la Ley de la Fiscalía General de la República, estableciéndose como supuestos que determinan tal representación cuando el menor carezca de representante legal o cuando los intereses de este sean contrarios a los del menor.
7. Existen en el Código de Familia imprecisiones que afectan la regulación de la representación de los menores de edad tales como: disparidad en la determinación de la sustitución de la representación legal que ostentan los padres como consecuencia de la suspensión o privación de la patria potestad, estableciéndose indistintamente representantes legales en virtud del artículo 97, tutores en correspondencia con el artículo 57 y tutores con representación reforzada o igualada a la de los padres por imperio del artículo 147 y se advierte la regulación del ejercicio conjunto de la patria potestad con supuestos muy restringidos para la concentración de las facultades derivadas de la patria potestad

en uno de los padres, lo que provoca que se interpreten desacertadamente los supuestos en que corresponde al Fiscal la representación, respecto a lo que no se avizora solución en el anteproyecto del nuevo Código de Familia.

8. La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral carece de disposiciones en relación a la intervención de la Fiscalía que permitan dar tratamiento a los casos en que en un único asunto el Fiscal deba ser escuchado por imperio de la ley y le corresponda promoverlo en representación de menores o incapaces, es decir ejercite al mismo tiempo las funciones que le atribuyen los artículos 47 y 48 de ese cuerpo legal. Esta omisión provoca que los fiscales opten por aguardar a la constitución de la tutela y no ejerciten sus facultades representativas.
9. La Instrucción 11 de 10 de agosto de 1999 Metodología sobre la intervención del Fiscal en los asuntos civiles, de familia y notariales, actualizada

durante el año 2007 posee una deficiente regulación de las indicaciones metodológicas encaminadas a regular debidamente el ejercicio de la representación de menores, en especial lo relacionado con el control y seguimiento de la situación jurídica los niños carentes de representantes legales, así como para prever como parte de la investigación la comprobación de la existencia de menores cuya representación corresponde al Fiscal durante la tramitación de todos los asuntos en los que este interviene o es parte, lo que ayudaría a revertir la escasa información que al respecto recibe y colocaría al fiscal en mejores condiciones para la defensa del infante.

10. No existen normas institucionales que pormenoricen o reglamenten el cumplimiento del deber jurídico establecido en el artículo 140.3 del Código de Familia sobre la comunicación al Fiscal de la existencia de niños desprovistos de tutor.

## EFICACIA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ADULTO MAYOR INSTITUCIONALIZADO.

### *¿Ficción o realidad?*

**L**a población mundial está envejeciendo progresiva y rápidamente. Este escenario representa un gran desafío para las sociedades, de generar un sistema integral que no solo permita prolongar la existencia, sino también la calidad de vida de los adultos mayores.

En el siglo XX el número de personas que en el mundo rebasó los 60 años de edad, aumentó de 400 a 700 millones. Como era de esperar, el proceso de envejecimiento de la población ocurrió primero en países ricos, ahora está ocurriendo en un 70%, en países pobres.

Entre los países de desarrollo con transición avanzada se encuentran Japón (35.1%), Italia (34.0 %) y Alemania (33.2%). En América Latina se encuentran Argentina, Puerto Rico y Cuba, entre otros. Se prevé que para el año 2020 alrededor de 400 000 cubanos habrán cumplido los 80 años, para el 2025 Cuba será el país más envejecido de América Latina y para el año 2050, uno de los más envejecidos del mundo.

Es por ello, que en la preparación para asumir el fenómeno y crear las condiciones de vida para que el adulto mayor viva



con el mayor bienestar posible, el Estado cubano ha asumido el envejecimiento poblacional como uno de sus retos socioeconómicos más importante a corto y mediano plazo, de ahí que ha generado medidas y programas que incentivan las relaciones entre la salud mental y la social de las personas de la tercera edad. Entre ellas se destacan:

- El nivel comunitario es el más cercano al adulto mayor y es donde se ha propuesto iniciar las estrategias de atención, promoción de salud, prevención y adecuación de los servicios y recursos sanitarios a sus necesidades. Se materializa a través de los consultorios médicos de la familia y policlínicos docentes, con programas diferenciados para los casos centenarios.
- En el ámbito hospitalario se incrementan las camas para estos pacientes y se prevé el servicio de geriatría.
- Se incentiva la formación de geriatras, especialidad en medicina que, a diferencia de otras, se otorga de manera directa.
- La fundación de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (con más de 12 años de experiencia y diseminadas por todos el país con 17 sedes).
- Mejoramiento de las Casas de Abuelos y Hogares de Ancianos. (Lineamientos 144 y 173 del Programa de Desarrollo<sup>4</sup>).

Dentro de las políticas aprobadas como parte de la actualización del modelo económico cubano el Consejo de Ministro -que sesionó en el año 2013- presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, acordó el mejoramiento y la ampliación de estas instituciones geriátricas, dada la alta demanda de ancianos que, por no tener un respaldo familiar que le garanticen el debido cuidado, requieren de los servicios que se ofrecen por estos centros.

Es decir, que para llenar el vacío que nace de la inexistencia o inhabilidad de las personas obligas a actuar (familia) el Estado ha creado entidades públicas con la finalidad de proteger este sector de

## ESP. MILAGROS RODRÍGUEZ ESTRADA

FISCAL

FISCALÍA PROVINCIAL VILLA CLARA



## ESP. SARA DEL CARMEN VARGAS ABREU

FISCAL

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DEL FISCAL GENERAL



la población que se encuentra en clara situación de desamparo.

Específicamente para los Adultos Mayores que se encuentran internados en dichos establecimientos asistenciales y que por razón del deterioro progresivo de sus capacidades psicofísicas llegan a una situación total de incapacidad para el desarrollo por sí mismo de las actividades de la vida diaria y para tomar decisiones importantes sobre su persona y/o

bienes, nuestro ordenamiento jurídico ha previsto la representación legal, siendo el Director de la institución quien lleva sobre sí esta función.

Los operadores del derecho no estamos ajenos al llamado del Presidente, cuando expresa que: “La atención a los ancianos es una prioridad”, por el contrario tenemos la responsabilidad de contribuir por la calidad en la atención y el cuidado de las personas selectas, que permanecen los últimos años de sus vidas en los mencionados centros asistenciales.

La representación legal concedida a las instituciones estatales –Hogares de Ancianos– que la dinámica social ha ido implantando, ha creado innumerables disfunciones e incongruencias, debido a que no posee una enunciación e instrumentación jurídica acertada y objetiva, dando lugar a omisiones que repercuten en la efectiva protección jurídica de estos sujetos.

Con la presente Ponencia “Eficacia de la representación legal del Adulto Mayor institucionalizado”. ¿Ficción ó realidad?, se pretende abordar los aspectos esenciales en cuanto a las insuficiencias en la instrumentación jurídica y en el ejercicio de la representación legal al Adulto Mayor que ejercen los Directores de los Hogares de Ancianos. Se abordará además como en nuestra provincia se implementan los Lineamientos 144 y 173 del Programa de Desarrollo aprobado por el Consejo de Ministro, que prevé el mejoramiento y la ampliación de las Casas de Abuelos y los Hogares de Ancianos.

## Conclusiones

1. El Adulto Mayor merece el pleno respeto de sus derechos, tanto en el plano individual como social y este debe ser

el principio que inspire toda legislación que pretenda dar soluciones a los problemas que viven las personas mayores en cualquier sociedad.

2. La normativa familiar cubana define al director de los hogares de ancianos como el representante legal del Adulto Mayor incapacitado, no sujeto a tutela, interno en la institución asistencial.
3. Queda expedita a la vía administrativa la regulación de la representación legal institucional del adulto mayor, siendo esta omisa en cuanto a las deficiencias tratadas.
4. Como parte de la actualización del modelo económico cubano se adoptan medidas en el país, referente al mejoramiento y ampliación de las casas de abuelos y hogares de ancianos, así como las propuestas de normas jurídicas y procedimientos para la implementación de estas medidas.
5. Al amparo de la Ley No. 83 de la Fiscalía General de la República, el Fiscal cumple funciones en la defensa y protección al adulto mayor, sin embargo, su actuación se ve limitada al omitir la norma sustantiva su función fiscalizadora y de control cuando se constituye esta modalidad de representación.
6. La dualidad de funciones que ejecutan los directores de los hogares de ancianos, limitan su capacidad para de manera adecuada cumplir con los deberes que presupone la actividad representativa, pues los efectos de su actuación solo alcanzan la esfera personal y no la patrimonial del adulto mayor representado. Además dejan excluidos a aquellos ancianos que internos en la institución asistencial, poseen incapacidad, pero no cuentan con la declaración judicial que la confirma al no haberse interesado el proceso correspondiente

<sup>1</sup> Dentro de las estrategias a implementar en este sentido, el Jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Marino Murillo Jorge, mencionó la ejecución de un programa de reparación y mantenimiento constructivo, de recuperación y completamiento del mobiliario, la eliminación de barreras arquitectónicas, así como la mejoría en la calidad de la atención a cargo del personal y del servicio que se ofrecen por estas instituciones. Informó que la demanda actual es superior a las capacidades existentes en estos centros geriátricos, por lo que para el período 2013-2015 se aumentarán en 99 los Hogares de Ancianos y en más de 100 las Casas de Abuelos en todo el país.

# EL PAPEL DEL FISCAL JEFE MUNICIPAL EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES FISCALES E INVESTIGACIONES

**L**a Fiscalía General de la República en virtud del mandato constitucional refrendado en los artículos 127 y siguientes de nuestra Carta Magna es el Órgano de Poder del Estado al que le corresponde el control y la preservación de la legalidad, así como la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del propio Estado.

Teniendo en cuenta las mencionadas facultades y la responsabilidad que de ellas se desprende para la protección del orden político y social de nuestro país, la Fiscalía General de la República se erige como el Órgano al que se le ha confiado la protección del orden político y jurídico de nuestro Estado y la sociedad, garantizando el restablecimiento de la legalidad quebrantada, promoviendo acciones y medidas contra los infractores; funciones estas que debe desarrollar para tributar a la protección jurídica de la sociedad, el Estado y la institucionalidad, todo ello bajo un irrestricto apego a los principios de la Revolución, y a sus líderes principales.

Con la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y su Primera Conferencia Nacional, nuestro país inició un proceso de profundas transformaciones que incluyó su actualización política, económica y social<sup>1</sup>, ello trajo consigo un reforzamiento del rol de nuestro Órgano,

**LIC. ELOANY DIAGO ROMERO**

*FISCAL JEFE MUNICIPAL*

*FISCALÍA CÁRDENAS*



partiendo de la necesidad de reforzar el enfrentamiento al delito, las disciplinas sociales y sobre todo contra la corrupción; conductas estas consideradas como incompatibles con las conquistas de nuestro Sistema Social<sup>2</sup>.

En este contexto histórico y tomando como antecedentes las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura del IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Fiscalía General de la República inició un proceso de redi-

<sup>1</sup> "... los resultados del debate, por los datos recopilados, constituyen un formidable instrumento de trabajo, para la dirección del Gobierno y el Partido a todos los niveles, así como una suerte de referéndum popular respecto a la profundidad, alcance y ritmo de los cambios que debemos introducir..." Fragmento del Informe Central al VI Congreso del PCC presentado por Raúl Castro Ruz, Palacio de las Convenciones, La Habana, 19 de abril de 2011.

<sup>2</sup> "...La actualización del modelo socialista cubano está encaminada a asegurar bienestar, equidad y justicia social para todas las cubanas y cubanos. Los cambios... tienen como objetivo, la construcción de un socialismo cubano cada vez más justo, próspero y sostenible" Fragmento de la declaración Bruno Rodríguez Parrilla, en el Debate General del 69 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York, 27 de septiembre de 2014.

seño de su estructura y funcionamiento que le permitiera asumir el incremento de su nivel de actividad de manera integrada, ágil y oportuna, como respaldo a las modificaciones funcionales, estructurales y económicas que se adoptarían por la máxima dirección del país.

Como colofón a los anteriores presupuestos y atendiendo a las recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular a la Fiscalía General de la República en este nuevo escenario de cambios, una de las actividades cuyo perfeccionamiento se puede constatar es la de verificaciones fiscales, cuyas metas han apuntado hacia la necesidad de alcanzar mayor integralidad en su ejecución, incrementando su calidad, celeridad y organización, exigiendo responsabilidad a los infractores; así como a la eliminación de las causas y condiciones de las violaciones que se pongan de manifiesto, manteniendo informada a la máxima dirección del país.

Todos estos requerimientos compulsoaron al establecimiento de objetivos de trabajo con sus correspondientes criterios de medidas, que permitieran valorar su impacto y de esa manera cumplir con los compromisos asumidos por nuestro Órgano; encaminándose de esta manera al mantenimiento de la institucionalidad mediante el incremento de la profesionalidad, calidad y celeridad de las investigaciones, incrementar la incidencia de las verificaciones hacia sectores de mayor importancia para el país, especialmente las sectorializadas, con el establecimiento de sus responsables directos y colaterales, así como las causas y consecuencias que propiciaron las violaciones, además de perfeccionar la tramitación de los procedimientos confiscatorios para el enfrentamiento a las manifestaciones de corrupción.

Para dar cumplimiento a cada una de estas metas se ha indicado por la máxima

dirección de nuestro Órgano, el cumplimiento estricto de lo normado en la mencionada actividad de trabajo, siendo el requisito esencial en ello la participación del fiscal jefe municipal en todas las etapas del proceso a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La labor antes apuntada, no puede desarrollarse de manera espontánea, pues está imbricada de una complejidad inmanente, ya que constantemente tiene que tomar decisiones, ha de formular permanentemente planes de actuación y estas decisiones, planes y programas no puede realizarlos con un fundamento racional si carece de información coherente.

En vetustas definiciones de tal gestión, los jefes solamente eran personas cuyo poder formal se ejercía mediante acciones repetitivas o de registrar y controlar aquellas que el cotidiano hacer les imponía, empero, a la luz de los actuales conocimientos y al desarrollo de las ciencias, se han dejado de lado las prácticas obsoletas con miras a un dinamismo en el empleo de novedosas técnicas de dirección que implementen un desarrollo armónico de labores como el control, la planificación, la organización y el mando<sup>3</sup>.

La realidad del cotidiano hacer de los jefes municipales en la actividad de verificaciones fiscales, ha demostrado que los métodos y estilos de dirección aplicados a ella son inefectivos en relación con los cambios que se suceden en la vida económica, social y cultural de nuestra sociedad. Tales cambios, presuponen la modificación de los sistemas de trabajo y los modos y formas de lograr su implementación efectiva, siendo requisito sine cuanon, aceptar el cambio e insertarse en esta dinámica de sucesos a los efectos de lograr el cumplimiento cabal de las misiones institucionales que nos han sido encomendadas.

<sup>3</sup> Según la definición que ofreciera Luther Halsey Gulik, (1892-1992), las funciones de dirección se conforman de: planificación, organización, personal, dirección, control y representatividad, definiciones que el propio teórico utilizaba con el acrónimo POSDCORB, en sus siglas en inglés (planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, y budgeting). Y según Henri Fayol (1841-1925) las mencionadas funciones se componían en planeación, organización, dirección, coordinación y el control.



Sobre la base de los antecedentes planteados se enuncia el siguiente Problema de investigación: ¿Qué procederes deben ser perfeccionados con relación a la labor de dirección del fiscal jefe municipal, en la planificación y ejecución de la actividad de verificaciones fiscales, para la consecución de los objetivos institucionales?

De manera que en el desarrollo del trabajo se define como Objetivo General: Identificar acciones para elevar la efectividad de la labor de dirección de los fiscales jefes municipales en la actividad de verificaciones fiscales.

A partir del objetivo general, se conciben como Objetivos Específicos:

1. Enunciar los fundamentos legales y metodológicos que sustentan las verificaciones fiscales relacionados con las normativas de la actividad de cuadros y capacitación.
2. Identificar los procederes del fiscal jefe municipal en la actividad de verificaciones fiscales en la provincia Matanzas.
3. Proponer las medidas necesarias para perfeccionar la labor de dirección de los fiscales jefes municipales en la actividad de verificaciones fiscales.

Las Técnicas utilizadas en el desarrollo de esta investigación fueron las siguientes:

- La Revisión de Documentos: Partiendo de la revisión de las normas metodológicas de las actividades de verificaciones fiscales y cuadros y capacitación; los informes de balance anual, las actas de los consejos de dirección ordinarios y ampliados y las actas de supervisión del Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía Provincial de Matanzas; las actas de las reuniones de trabajo, expedientes de verificaciones fiscales y los controles primarios habilitados en la Fiscalía Municipal de Matanzas; con el objetivo de identificar las problemáticas principales en la labor de dirección de los fiscales jefes, las causas que las generan y posibles medidas a adoptar.

- Entrevistas a dos supervisores de la actividad de verificaciones fiscales, las que persiguen el objetivo de definir la conceptualización de dicha acción de control como parte de la misión institucional de la Fiscalía, identificar las herramientas normativas imprescindibles para el desarrollo efectivo de la labor de dirección en la actividad de referencia; así como identificar las principales deficiencias advertidas en dicha gestión y las medidas para solucionarlos.
- Entrevistas a ocho los fiscales jefes municipales de la provincia de Matanzas, las que tendrán como objetivo central, definir los momentos en los cuáles se insertan en la actividad de verificaciones, identificar la base normativa con que cuentan para el ejercicio efectivo de sus funciones de dirección, identificar las deficiencias que presentan y las propuestas para su solución.
- Encuestas a once fiscales ejecutores de las verificaciones fiscales de la provincia de Matanzas a los efectos de identificar las deficiencias que los mismos advierten en la labor de dirección de los fiscales jefes municipales, contrastar su percepción con la de los jefes respecto al impacto de la labor de dirección de los primeros y diagnosticar las insuficiencias que presentan y las propuestas para su solución.

## Conclusiones

1. Esta investigación constituye una aproximación al tema sin que esto presuponga freno para otros fiscales jefes municipales que pretendan abordar la problemática, lo que se pretendió fue obtener herramientas de dirección que permitan desde la realidad encausar la función directiva, control, en la consecución de metas, evaluando y corrigiendo oportunamente cualquier desviación que se presente en su cumplimiento.
2. Desde el punto de vista metodológico se

da respuesta al problema de investigación planteado quedando demostrado que elevando la calidad del control que realizan los fiscales jefes municipales a las verificaciones fiscales en ejecución es la manera de garantizar los objetivos trazados con la eficacia que estos tiempos demandan.

3. Finalmente se exponen los resultados obtenidos los que se sustentan en la labor de estudio e intercambio con fis-

cales de la especialidad a través de los instrumentos aplicados a estos, donde libremente expresaron sus criterios y consideraciones, la mayoría coincidente con los criterios de la autora, en relación con el problema planteado, haciendo recomendaciones que de ser tenidas en cuenta contribuirían a la transformación de la calidad de las verificaciones fiscales que se ejecuten.

## DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA PARA LA FISCALÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD

La investigación es un primer acercamiento a la realidad comunicativa en la Fiscalía Provincial Sancti Spíritus. El diagnóstico realizado constituye la primera fase del estudio, cuyo objetivo principal es caracterizar dichos procesos comunicativos internos. Es, por tanto, un estudio descriptivo y aplicado que, además, contempla una segunda fase, integrada por el diseño de un Manual de Gestión de la Comunicación Interna donde se proponen las políticas, se norman los usos de canales y flujos, los contenidos de los mensajes, se describen los públicos, se sugiere la estructura de comunicación, se proyecta la estrategia de comunicación con su correspondiente plan de acción y sus métodos de evaluación, entre otros aspectos. La muestra se compone por todo el universo de los sujetos que conforman el público interno. Los principales instrumentos de investigación utilizados fueron la revisión bibliográfica documental, la entrevista, la observación no participante y la encuesta.

### Conclusiones

Seguidamente se exponen las conclusiones y recomendaciones que se derivan de la investigación realizada, las cuales se relacionan con las premisas y objetivos asumidos como puntos de partida.

Los resultados obtenidos en el estudio permiten llegar a una serie de criterios concluyentes sobre el estado de los procesos comunicativos internos en la Fiscalía Municipal de Trinidad, a la vez que es posible comprobar la certeza o no de la hipótesis planteada al inicio de la investigación y dar respuesta a los objetivos propuestos. En este sentido, se constató la ausencia de una Gestión de Comunicación que articule sus diferentes fases, existe cierto grado de empirismo, motivado principalmente por el desconocimiento generalizado de los temas relativos a la Comunicación Institucional, no se realizan acciones de manera coordinada en función de la comunicación, la falta de comprensión y concientización

**ESP. DULVIS C. ALTUNA BARRABÍ**

ponente:

**MSC. YANELKIS HERNÁNDEZ PICHES**

FISCAL MUNICIPAL SANCTI SPÍRITUS



por parte de directivos y trabajadores, acerca de que la actividad de comunicación institucional es inherente a todas las especialidades del órgano (atención a la población, actuación del fiscal en juicio oral, supervisiones e investigaciones, protección de menores y control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios), la inexistencia de disposiciones en la Ley de la Fiscalía General de la República y en su Reglamento, que regule la estructura y funciones de la actividad de comunicación institucional, además de la dispersión de documentos en los que se pauta la actividad, insuficiente conocimiento del personal de la Fiscalía sobre los componentes comunicacionales de la institución y de la documentación y normas que regulan la actividad, deficiencias en los procesos de comunicación interna con predominio del flujo de información vertical descendente (jefes a subordinados) e inexistencia de un mecanismo de retroalimentación que permita conocer y evaluar de forma permanente las opiniones, criterios y sugerencias del público interno sobre la actividad del órgano, insuficiente nivel de interrelación entre las áreas de trabajo del órgano y poca colaboración, que genera dificultades en el flujo de la información desde los departamentos del órgano y las fiscalías

municipales, insuficientes acciones en el plan de capacitación del órgano dirigido a elevar los conocimientos sobre la comunicación institucional, falta de una segmentación de público externo, insuficientes acciones de comunicación dirigidas a estos segmentos y limitado alcance de las publicaciones del órgano, que carecen de un enfoque social, dificultan el cumplimiento de la función asignada a la Fiscalía de contribuir a elevar la conciencia jurídica ciudadana, falta de información al público externo sobre las funciones del órgano, que ha propiciado la conformación de una imagen desfavorable sobre la Fiscalía, de temor, rechazo, crítica y no apoyo a la labor fiscal, falta de una identidad institucional definida y de un Manual de Identidad que regule la aplicación de los atributos y la carencia de locales, personal idóneo y otras condiciones materiales que afectan la comunicación interna y externa, e impactan negativamente en el desarrollo de actividades como la atención a la población.

Como es sabido, en la organización, las acciones no son planificadas como resultado de una gestión de la comunicación, sino que estas se conciben como parte del plan general. En su gran mayoría se limitan a las exigencias estipuladas por la Resolución 62/14 del Fiscal General de la República. No obstante se espera que estos primeros pasos, sean la semilla para que, en el futuro, se reconozcan los beneficios que ofrece una Gestión Integrada de la Comunicación Institucional. Sobre la base de los resultados obtenidos en el Diagnóstico de Comunicación Interna se diseñó un Manual de Comunicación en correspondencia con la realidad comunicativa de la Fiscalía Municipal de Trinidad y donde se tuvieron en consideración tanto las políticas para el ámbito interno, como la estrategia a seguir en los próximos dos años. El Manual que se propone se sustenta, además, en lo estipulado por el capítulo XIX del Decreto 281 del Perfeccionamiento Empresarial e incluye todos los requisitos que el mismo exige.

# SABÍAS QUE...

- Es obligación del fiscal controlar la legalidad en los establecimientos penitenciarios, lo cual significa garantizar que se cumplan los derechos de los internos tales como la superación técnica, la vinculación al trabajo, la asistencia médica y estomatológica, la visita de sus familiares y una alimentación adecuada.
- En el juicio oral el fiscal tiene la potestad de mantener, modificar o retirar su acusación ya sea por error en la calificación del delito, porque existen circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad penal o porque no se pruebe convincentemente la culpabilidad del acusado.
- Según el Código Civil, la personalidad comienza con el nacimiento y se extingue con la muerte y la persona natural tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones desde su nacimiento.

Las personas jurídicas son entidades que, poseyendo patrimonio propio, tienen capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones.

Son personas jurídicas, además del Estado:

1. Las empresas y uniones de empresas estatales.
2. Las cooperativas.
3. Las organizaciones políticas, de masas, sociales y sus empresas.
4. Las sociedades y asociaciones constituidas de conformidad con los requisitos establecidos en las leyes.
5. Las fundaciones, entendiéndose por tales el conjunto de bienes creado como patrimonio separado por acto de liberalidad del que era su propietario, para dedicarlos al cumplimiento de determinado fin permitido por la ley sin ánimo de lucro, y constituidas de conformidad con los requisitos establecidos en las leyes.
6. Las empresas no estatales autorizadas para realizar sus actividades.
7. Las demás entidades a las que la ley confiere personalidad jurídica.



# UN ACERCAMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA EN CUBA



**LIC. YANELIS FERNÁNDEZ PEÑA**

PROFESORA DE DERECHO FINANCIERO  
FACULTAD DE DERECHO  
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

## I. Consideraciones preliminares

La actividad financiera vista como aquellos actos, mecanismos, procedimientos u operaciones que realizan un conjunto de órganos o entes públicos que ponen en movimiento las finanzas públicas, ya sea concentrándolas, distribuyéndolas o utilizándolas<sup>1</sup>, es una actividad exclusiva del Estado que le permite realizar sus funciones. Digamos entonces que se dirige a la captación de medios económicos o monetarios, entiéndase como ingresos, los que serán administrados, distribuidos y empleados en la realización de los gastos públicos, cumpliendo así una de las finalidades estatales, la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

La Política Fiscal<sup>2</sup> es un ejemplo de incidencia de la actividad financiera en la economía y desempeña en este entorno de transformaciones en el que se encuentra inmersa nuestra nación un rol fundamental, si tenemos en cuenta que actúa

como un componente estabilizador de la economía nacional, toda vez que, dispone de instrumentos para influir en el curso de las tendencias y resultados globales de la economía, estableciendo equilibrios necesarios ante eventuales fenómenos desestabilizadores, por lo que el gobierno, con su correcta puesta en práctica, puede ejercer una notable influencia en los resultados económicos finales del país.

Según el Lineamiento no. 56 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, *la política fiscal deberá contribuir al incremento sostenido de la eficiencia de la economía y de los ingresos al Presupuesto del Estado, con el propósito de respaldar el gasto público en los niveles planificados y mantener un adecuado equilibrio financiero, tomando en cuenta las particularidades de nuestro modelo económico.*

Véase entonces como uno de los instrumentos de los que se vale la Política

<sup>1</sup> F.Sainz de Bujanda: *Sistema de Derecho financiero*, vol. I, Ed. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1977, p.31, y F. Pérez Royo: *Derecho financiero y tributario*. Parte general, 12.ed. Ed.Civitas Ediciones, S.L, España, 2002, p.25.

<sup>2</sup> Se ha planteado: "La forma concreta en que el Estado determina el monto total y la composición de los recursos, captados de los diferentes agentes económicos, y de las erogaciones realizadas con el fin de realizar sus funciones constituye y expresa la política fiscal adoptada". Vid. UMANSKY, Isaac, BENÍTEZ FERNÁNDEZ, Arely y CHAVIANO SALDAÑA, Noel, "Ámbito de las finanzas públicas", en COLECTIVO DE AUTORES, *Administración Financiera del Estado cubano*, CECOFIS, 2003, p. 33.

Fiscal el Sistema Tributario, siendo necesario en nuestro país, reformar toda la plataforma jurídica para atemperarlo a las condiciones sociales y económicas actuales y lograr armonía con los objetivos proyectados, por lo que con la promulgación de la Ley no.113 del *Sistema Tributario*<sup>3</sup> fueron formalizados los cambios en este sentido, apreciándose, sin dudas, una reoxigenación de la tributación en Cuba basada en la experiencia de la aplicación de la Ley no.73 del *Sistema Tributario*<sup>4</sup> y otra proyección del Estado en el plano económico.

Le corresponde entonces a la ya referida normativa, a tenor de lo establecido en los referidos Lineamientos, garantizar los recursos monetarios que permitan enfrentar las erogaciones que debe cumplir el Estado en función de la satisfacción de las necesidades generales de la sociedad cubana; servir de mecanismo de redistribución de riquezas; convertirse en vía de estímulo a los sectores, actividades y conductas que contribuyen al desarrollo socio-económico y desestimar aquellos que son contrarios a ello; fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad que ostentan los ciudadanos y las entidades económicas en el cabal cumplimiento

de las obligaciones tributarias; estimular la implicación de los gobiernos locales en la búsqueda de ingresos para sus presupuestos e implementar un sistema de control que asegure el cumplimiento estricto de las regulaciones tributarias. Se trata, en definitiva, de convertir al sistema tributario en un efectivo mecanismo de la política económica nacional<sup>5</sup>.

El análisis del contenido y los resultados esperados de esta normativa pudieran resultar prematuros aún en este contexto, el objetivo esencial es abordar un tema medular, la cultura tributaria, resaltar la importancia de fomentarla y plasmar algunas ideas de cómo deben accionar los órganos administrativos con competencias financieras, en este caso y en primer orden la Administración Tributaria<sup>6</sup>, y el Ministerio de Finanzas y Precios<sup>7</sup> en apoyo a esta como uno de los órganos rectores de la actividad financiera<sup>8</sup>. No pudiera este ensayo determinar de manera exacta cómo se comporta la educación en materia tributaria actualmente en nuestro país, sería necesario al menos realizar un trabajo de campo y obtener muestras representativas, el que seguramente, aportaría datos sumamente interesantes, pero excede los propósitos del mismo.

<sup>3</sup> Publicada en la *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, Edición Ordinaria no. 53, de 21 de noviembre de 2012; entró en vigor el 1ro de enero de 2013, según la Disposición Final séptima de la Ley en cuestión.

<sup>4</sup> De 4 de agosto de 1994, publicada en la *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, Edición Extraordinaria no. 8, de 5 de agosto de 1994.

<sup>5</sup> Cfr. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (específicamente del 56 al 65), Acuerdo no. VII-78 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de 23 de julio de 2012 (publicado en la *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, Edición Extraordinaria no. 41, de 21 de septiembre de 2012) y los Por Cuanto de la Ley no. 113.

<sup>6</sup> La Oficina de Administración Tributaria opera como una unidad presupuestada y está adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios, sus funciones comprenden la gestión, control, determinación, recaudación y fiscalización de los tributos que por ley se establecen, incluyendo los intereses, la aplicación de los recargos y sanciones que en su caso correspondan, las solicitudes de devoluciones de ingresos, la solución de las reclamaciones que se presenten contra sus actos y cualquier otra de similar naturaleza a las anteriores que deba entenderse referida a su actuación. Sus funciones aparecen enumeradas en los artículos 12 y 13 del Decreto no.308 *Reglamento de las Normas Generales y los Procedimientos Tributarios*, de fecha 31 de octubre de 2012.

<sup>7</sup> El Ministerio de Finanzas y Precios se encarga de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política financiera, tributaria, de precios y de seguros del Estado y el Gobierno. Es además el organismo rector y coordinador de los sistemas que integran la administración financiera del Estado cubano.

<sup>8</sup> Véase artículos 1 y 3 del Decreto Ley 192 de fecha 12 de abril de 1999, de la *Administración Financiera del Estado*. La Administración financiera del Estado cubano a partir de un conjunto de principios, normas, sistemas, instituciones y procedimientos administrativos va a obtener los recursos financieros que el Estado necesita para satisfacer las necesidades colectivas de nuestra sociedad. Ella se apoya en unos sistemas interrelacionados entre sí, que le permiten obtener recursos financieros públicos, administrarlos, controlarlos y aplicarlos o utilizarlos en la consecución de los objetivos estatales; ellos son: Sistema Tributario, Sistema Presupuestario, Sistema de Crédito Público, Sistema de Tesorería y Sistema de Contabilidad Gubernamental.

## II. La cultura tributaria: una mirada desde dentro

El Lineamiento no. 63 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución establece: *Fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad social de la población y entidades del país en el cumplimiento cabal de las obligaciones tributarias, para desarrollar el valor cívico de contribución al sostenimiento de los gastos sociales y altos niveles de disciplina fiscal.*

Nos ocupa entonces definir qué comprendemos por cultura tributaria y realizar algunas reflexiones necesarias en torno al tema, que como pudimos constatar en el estudio bibliográfico no es harto abordado por especialistas e investigadores patrios.

Podemos entender la cultura tributaria como el conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de una sociedad con respecto a la tributación y la observancia de las normas jurídicas que la rigen; esto se traduce en una conducta manifestada de los contribuyentes en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social.

No puede obviarse que un estímulo (o desestímulo) importante para la tributación lo constituye el manejo y destino de los fondos públicos, independiente que para muchos ciudadanos, tributar es un acto discrecional relacionado con su percepción positiva o negativa sobre el uso de los fondos, de ahí la especial relevancia que reviste la transparencia en la ejecución de los gastos públicos y la publicidad que debe acompañar estos actos.

Uno de los objetivos de la cultura tributaria debe ser, precisamente, romper ese círculo vicioso y hacer conciencia que la tributación no sólo es una obligación legal, sino un deber ciudadano, por lo que

cumplir con tal responsabilidad confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos.

La formación de la conciencia tributaria no se realiza en corto tiempo, ya que implica un proceso continuo de aprendizaje y asimilación por parte de la sociedad guiada por las instituciones que le corresponden estas funciones.

Por lo que las acciones deben dirigirse a que los contribuyentes tomen conciencia en cuanto al deber de tributar y comprendan que las razones fundamentales de este acto es proporcionar al Estado los medios necesarios para que cumpla con su función primaria, que no es más que garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes.

El desarrollo de estrategias dirigidas al incremento de una mayor cultura tributaria es de vital importancia para la sociedad y muy especialmente para las partes de la relación jurídico tributaria. Por un lado, la administración tributaria debe desplegar una función de concientización de los ciudadanos para el cumplimiento de las obligaciones, dando a conocer aspectos fundamentales de los tributos, por otro lado, los contribuyentes logran una actitud tributaria responsable, motivada por creencias y valores que conduzcan a la aceptación del deber de contribuir para que el Estado cumpla con sus fines.

Por tal razón es el Estado el más interesado en desarrollar la cultura tributaria, pues de esta forma se asegurará el conocimiento de los deberes y derechos tributarios y consecuentemente el cumplimiento de la obligación tributaria de manera voluntaria por parte de los contribuyentes.

Se considera oportuno entonces plantearnos algunas reflexiones para fomentar la cultura tributaria como pueden ser:

- La importancia de la participación social en la gestión y ejecución de los proyectos para la formación de la cultura tributaria.
- La importancia de visualizar la educación fiscal como parte sustantiva de la formación de valores y la construcción de ciudadanía.
- La necesidad de desarrollar una estrategia integral con tres áreas: educación, promoción y divulgación.
- La valoración social de lo fiscal, es decir, la importancia de considerar la otra cara de la moneda: el uso de los recursos provenientes de los tributos.
- Informar oportunamente a los contribuyentes de los cambios legislativos en materia tributaria.
- Dar a conocer al contribuyente sus deberes y derechos en el acto de inscripción en la Oficina de Administración Tributaria.
- Realizar charlas y talleres en los consejos populares presentando los aspectos fundamentales del sistema tributario en Cuba y los derechos y deberes que adquieren como contribuyentes.
- Entrega de trípticos con información tributaria.
- Utilización de los medios de difusión masiva, radio, televisión y prensa plana.
- Incluir en los programas docentes de los diferentes niveles de enseñanza la formación de los valores cívicos, fomentando la colaboración y solidaridad social, con el principio de que los niños de hoy son los contribuyentes de mañana.

Por ello, en el escenario actual, con la aparición de nuevos sujetos económicos, corresponde a la Oficina Nacional de Administración Tributaria, según le viene dispuesto<sup>9</sup> por ley, fomentar en los ciudadanos la cultura tributaria, al desempeñar un papel activo en la educación de los contribuyentes a partir de estrategias encaminadas hacia tres esferas de proyección pública: la educación, la divulgación y la promoción de la participación social, y concebirla, además, con una visión de mediano y largo plazo, contemplando acciones incluyentes, participativas y culturalmente apropiadas a la realidad social de nuestro país.

Recomendamos, entonces, desarrollar varias estrategias a un mismo tiempo, donde una se encargue de apoyar a la otra, como pueden ser:

- Asistencia activa al contribuyente por parte de la Oficina Nacional de Administración Tributaria.
- Fiscalización del cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes.
- Presentación de murales en las Oficinas de Administración Tributaria que divulguen las normas relativas al pago de los tributos y los beneficios y bonificaciones fiscales que se concedan.

El éxito de este programa generará, sin dudas, en la nación cubana una cultura tributaria sólida y sostenible y hará de la misma una de las bases fundamentales de la modernización y el desarrollo del país, cuyos principios y objetivos sean compartidos por los diversos sectores representativos de la sociedad.

Las sugerencias realizadas en este trabajo son solo el comienzo, debe pronunciarse con estudios profundos y acciones concretas la Administración Tributaria.

### III. Conclusión

Con lo expuesto solo pretendemos sentar ideas para un debate, para una reflexión constructiva que contribuya a un análisis profundo de la tributación en Cuba y que estimule el estudio de las diferentes variables que inciden en este fenómeno,

<sup>9</sup> De las funciones, artículo 12, inciso k del Decreto no.308, *Reglamento de las Normas Generales y los Procedimientos Tributarios*, de fecha 31 de octubre de 2012.



histórico-sociales, culturales, políticas y obviamente, que nos asista a comprender que efectivamente, la cultura tributaria es una herramienta necesaria para lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte del contribuyente y de esta forma evitar la evasión fiscal.

Por ello, no podemos medir el éxito del joven Sistema Tributario por la normativa misma, tenemos que compren-

der que camina de la mano de la educación que sea capaz de transmitir la Administración Tributaria a los contribuyentes en el cumplimiento de su deber social, lo que contribuirá, decisivamente, a formar una conciencia ciudadana, a lograr una mayor calidad institucional, estabilidad macroeconómica y por ende, los resultados que todos esperamos.

## BIBLIOGRAFÍA.

- ALONSO, José Antonio y VIDAL, Pavel (compiladores), *¿Quo Vadis, Cuba? La incierta senda de las reformas*, Editorial Catarata, Madrid, 2013.
- COLECTIVO DE AUTORES, *Administración Financiera del Estado cubano*, CECOFIS, La Habana, Cuba, 2003.
- COLECTIVO DE AUTORES, *Apuntes de Derecho Financiero cubano*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2005.
- COLECTIVO DE AUTORES, *Temas de Derecho Administrativo cubano*, Texto Básico, consultado en la bibliografía correspondiente al módulo de Derecho Administrativo entregado por el profesor en soporte digital.
- CORREDOR CORRALES, M. Y. y DÍAZ GARCÍA, W. J., "La cultura tributaria municipal. Diagnóstico en la parroquia El Valle del municipio bolivariano del distrito capital", en *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, no. 81, 2007. Disponible en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/>
- ESTÉVEZ, Alejandro M. y ESPER, Susana C., "Cultura Tributaria y ciudadanía: El caso argentino". Disponible en: <http://www.polipub.org>.
- FERNÁNDEZ ESTRADA, Oscar, "El Modelo de Funcionamiento Económico en Cuba y sus transformaciones. Seis Ejes Articuladores para su análisis", en *Revista Observatorio de la Economía y la Sociedad Latinoamericana*, No. 154, Cuba, 2011. Disponible en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu>.
- FERNANDO, "La Experiencia Educativa de la Administración Tributaria Española", en *Documentos*, no. 13, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España, 2009.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo español*, I tomo, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2006.
- GARCÍA RABELO, Margarita, "Transición socialista y modelo de desarrollo", en *Economía y Desarrollo*, No. 2, La Habana, Cuba, 2012.
- GORDILLO, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I. Parte General, Reimpresión de la 5ta edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Argentina, 2000.
- GORDO, Miguel, "El Cumplimiento Tributario Voluntario en Colombia: Notas para la discusión", Ediciones DIAN, Administración Tributaria de Colombia, Bogotá, Colombia, 2002.
- Ley no. 113, del Sistema Tributario, de 23 de julio de 2012. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, Edición Ordinaria no. 53, de 21 de noviembre de 2012.
- *Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*, 18 de abril, 2011.
- MATILLA CORREA, Andry, "Panorama general del Derecho Administrativo en Cuba", artículo consultado en la bibliografía correspondiente al módulo de Derecho Administrativo entregado por el profesor en soporte digital.
- PEÑA MÉNDEZ, María, "Cultura Tributaria vs Constitución 1992", en *Revista Provincia*, No.9, julio – diciembre, Cuba, 2002.
- PÉREZ ROYO, F, "Derecho financiero y tributario". Parte general, 12.ed., p.25. Ed.Civitas Ediciones, S.L, España, 2002.
- SAINZ DE BUJANDA, Fernando, "Sistema de Derecho Financiero", vol. I, Ed. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, España, 1977.

# GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

## EXÉGESIS JURÍDICA

En un contexto jurídico, la exégesis pretende interpretar el significado de textos legislativos de una manera rigurosa y objetiva. Esta forma de interpretación de un texto jurídico se conoce como método exegético, influido por el llamado Código Napoleónico. Se basa en el análisis literal de un texto, teniendo en cuenta la gramática utilizada y el significado directo, dando por hecho que las palabras son utilizadas con un significado específico.

## SINE QUA NON

Condition sine qua non o condición sine qua non es una locución latina originalmente utilizada como término legal para decir «condición sin la cual no». Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial —de carácter más bien obligatorio— para que algo sea posible y funcione correctamente.

## PENA DE NULIDAD

Es la que tiene como consecuencia dejar sin efectos jurídicos un acto o contrato.

La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez del acto jurídico, que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Para que una norma o acto sean nulos se requiere de una declaración de nulidad, expresa o tácita y que el vicio que lo afecta sea coexistente a la celebración del mismo.



# 13<sup>th</sup> International Meeting on Criminal Sciences 2016

## 1<sup>th</sup> Meeting on Legality, Law and Society

### ANNOUNCEMENT

From March 23<sup>rd</sup> to 25<sup>th</sup>, 2016  
Havana International Conference Center, Cuba



ISSN: 2414-8431

